

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“LA DEMANDA DE REVISION JUDICIAL COMO CAUSAL DE SUSPENSION Y LA AFECTACION AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”

Tesis para optar el título profesional de abogado

Autora:

Bach. Deysi Maribel Delgado Chacón

Asesor:

Ms. Santiago Manuel López Valverde



**Trujillo - Perú
2017**

DEDICATORIA

A Dios por guiarme e iluminarme
y hacerme fuerte para emprender
esta difícil pero no imposible meta
a trazar

A Celmira Chacón Veneros; Manuel Reyna Villanueva y Orlando Delgado Benites, mis queridos padres, quienes con esfuerzo y sacrificio supieron guiarme y apoyarme por el camino de éxito profesional, con mucho amor mi felicidad para ellos.

Con todo cariño a mis hermanos:

Paco, Celmira y Rocio por su recuerdo
y apoyo moral en todo momento.

Y en especial por el inmenso amor que les tengo, a mi querido esposo Santiago que está conmigo en cada momento y a mi hijito Santiaguito, porque todo lo que logro es por él y para él.

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial a Dios todopoderoso en quien creo y confío, porque por Gracia he recibido lo que hoy soy y tengo.

Agradezco a mis padres por su esfuerzo y apoyo incondicional en todo el proceso de mi formación personal y profesional, por enseñarme que en la vida las cosas no son fáciles, pero con ganas, esfuerzo y decisión todo se puede.

Al Ms. Santiago López, en su calidad de asesor, por su tiempo, enseñanzas y conocimientos brindados, fundamentales para este trabajo.

A mi esposo Santiago, por el amor y la fuerza que me da, por su comprensión, por ser mi compañero de toda la vida y mi felicidad.

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Presente. -

DEYSI MARIBEL DELGADO CHACON, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de esta Universidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos para la presentación, aprobación y sustentación de Tesis de la Facultad de Derecho, tengo el honor de presentar a ustedes el presente trabajo de investigación titulado: “La Demanda de revisión judicial como causal de suspensión y la afectación al Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Administración Tributaria”

Por tanto, dejo a su criterio la correspondiente evaluación de este trabajo de investigación, esperando que reúna los méritos suficientes para su oportuna aceptación.

Aprovechando la oportunidad para expresarles sentimientos de mi consideración y estima personal.

Trujillo, 13 de Setiembre de 2017.

BACH. DEYSI MARIBEL DELGADO CHACON

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre **LA DEMANDA DE REVISION JUDICIAL COMO CAUSAL DE SUSPENSION Y LA AFECTACION AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** para la acreencia de la deuda impaga.

El procedimiento de ejecución coactiva, consiste en que la propia administración pública, en virtud del principio de autotutela, ejecuta por la fuerza sus propios actos, que contenga obligaciones de dar, hacer o no hacer incumplida por el sujeto administrado. Esta ejecución tiene su propio procedimiento, en caso de los tributos del gobierno central se encuentra prescrito en el código tributario, y, en el caso de los gobiernos municipales, la cual está regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley 26979, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS.

La ejecución coactiva, es un procedimiento que tiene como finalidad la de hacer efectivo los mandatos derivados de los actos administrativos y que resulta con el incumplimiento por parte del obligado.

En la presente tesis se redactan objetivos planteados con el fin de demostrar la distorsión que ha generado la demanda de revisión judicial respecto a la función de las medidas cautelares, la cual permiten la dilación en la recuperación de la deuda y en otros casos pasiblemente resulten infructuosas por la insolvencia oportuna del deudor.

Asimismo, se redactan también conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta para una reforma del Texto Único Ordenado del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

En el Capítulo I se desarrolla el problema, en el cual se describe la realidad problemática que se presenta, luego en el Capítulo II se encuentra inmerso lo referente al Marco Teórico, entre los que se encuentran el Procedimiento de Ejecución Coactiva, su naturaleza y características asimismo se estudiara las Medidas Cautelares, el principio de autotutela y la revisión judicial; posteriormente el Capítulo III versa sobre la metodología que se aplicó para la siguiente tesis, y , por último el Capítulo IV, en el cual se procede a manifestar las conclusiones y recomendaciones.

Por lo que, la recomendación a partir de la presente investigación es que el Legislador, debe regular un mejor tratamiento de esta hipótesis legal, con la modificación del citado artículo, en la cual permita la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin que ello implique el levantamiento de las medidas cautelares trabadas, a fin de ser considerada como verdadera causal de suspensión de la cobranza, sin desnaturalizar este procedimiento como manifestación de la facultad de autotutela.

ABSTRACT

The present research deals with THE DEMAND FOR JUDICIAL REVIEW AS A CAUSAL OF SUSPENSION AND THE IMPACT OF THE CO-OPERATION PERFORMANCE PROCEDURE OF THE TAX ADMINISTRATION for the payment of unpaid debt.

The coercive enforcement procedure is that the public administration itself, by virtue of the principle of self-enforcement, forcibly executes its own acts, containing obligations to give, to do or not to do unfulfilled by the subject administered. This execution has its own procedure, in case of taxes of the central government is prescribed in the tax code, and, in the case of municipal governments, which is regulated by the Single Text Order of Law 26979, Law of Procedure of Coercive Execution - Law 26979, approved by Supreme Decree No. 018-2008-JUS.

The coercive execution is a procedure whose purpose is to enforce the mandates derived from administrative acts and that results in the breach by the obligor

In the present thesis, objectives are drawn up in order to demonstrate the distortion generated by the demand for judicial review regarding the function of the precautionary measures, which allow the delay in the recovery of the debt and in other cases, may prove fruitless due to the debtor's timely insolvency.

It also draws conclusions and recommendations to be taken into account for a reform of the Single Ordered Text of the Coercive Execution Procedure.

Chapter I develops the problem, which describes the problematic reality that is presented, then in Chapter II is immersed with reference to the Theoretical Framework, among which are the Coactive Execution Procedure, its nature and characteristics the precautionary measures, the principle of self-direction and judicial review; later Chapter III deals with the methodology that was applied for the following thesis, and, finally, Chapter IV, in which the conclusions and recommendations are made manifest.

Therefore, the recommendation based on the present investigation is that the Legislator should regulate a better treatment of this legal hypothesis, with the modification of that article, in which it allows the suspension of the coercive execution procedure, without implying the lifting of precautionary measures in order to be considered as a true cause of suspension of collection, without distorting this procedure as a manifestation of the power of self-order.

Tabla de contenido

CAPÍTULO 1. Introducción.....	1
1.1. Problema.....	1
1.1.1. Planteamiento del problema	2
1.1.2. Enunciado del problema	8
1.2. Hipótesis.....	8
1.2.1. Variables.....	8
1.2.1.1. Variable Independiente.....	8
1.2.1.2. Variable Dependiente	8
1.3. Objetivos	9
1.3.1. Objetivo General	9
1.3.2. Objetivos Específicos	9
1.4. Justificación.....	9
CAPÍTULO 2. Marco teórico	10
2.1. Antecedentes	10
2.2. Bases Teóricas.....	10
2.2.1. La Naturaleza del Procedimiento de Ejecución Coactiva	10
2.2.1.1. Concepto.....	10
2.2.1.2. Naturaleza.....	11
2.2.1.3. Características	12
2.2.1.4. Marco Legal	13
2.2.1.5. Sujetos que intervinientes.....	13
2.2.1.6. Medidas Cautelares	15
2.2.2. La Revisión Judicial	22
2.2.2.1. Definición.....	22
2.2.2.2. Requisitos	22
2.2.2.3. Competencia y Via Procedimental	23
2.2.2.4. Plazo para interponer la Demanda.....	24
2.2.2.5. Efectos de la Presentación de la Revisión Judicial.....	25
2.2.3. La Autotutela de la Administración Tributaria.....	26
2.2.3.1. Concepto.....	26
2.2.3.2. La Legitimidad de los Actos Administrativos	28

2.2.3.3.	La Ejecutividad y la Ejecutoriedad de los Actos Administrativos	29
2.2.3.4.	El Procedimiento de Ejecución Coactiva como manifestación de la Autotutela de la Administración Tributaria	31
CAPÍTULO 3. Metodológico.....		36
3.1.	Tipo de investigación	36
3.1.1.	Por su finalidad.....	36
3.1.1.1.	Investigación Básica.....	36
3.1.2.	Por su profundidad	37
3.1.2.1.	Investigación Descriptiva	37
3.1.3.	Por su naturaleza	37
3.1.3.1.	Investigación Documental	37
3.2.	Material de estudio	38
3.3.	Recolección de datos	38
3.3.1.	Técnicas.....	38
3.3.2.	Instrumentos	38
3.4.	Análisis de datos.....	39
CAPÍTULO 4. Resultados y Discusión		40
4.1	Resultados	40
CAPÍTULO 5. Conclusiones		98
5.1.	Conclusiones	100
5.1.	Recomendaciones.....	102
CAPÍTULO 6. Referencia Bibliográfica.....		103
Bibliografía.....		103
Anexos.....		107

CAPÍTULO 1. Introducción

1.1. Problema

1.1.1. Planteamiento del problema

El procedimiento de ejecución coactiva nace como una manifestación de la autotutela de la Administración, en el sentido en que es el procedimiento que utilizan las entidades de la Administración Pública para hacer efectivo el acto administrativo que estas emiten frente a los administrados. El Tribunal Constitucional, en cuanto a este instituto, ha señalado, en el fundamento 4 de la sentencia 0774-1999-AA/TC, que “(...) el procedimiento de ejecución coactiva es la facultad que tienen algunas entidades de la Administración Pública para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma Administración, es decir,[que] las obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para cada Administración, o sea, siempre dentro de un marco normativo (...)”.

Actualmente, la institución de la ejecución coactiva para la Administración Tributaria en nuestro país, se encuentra regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley 26979, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS.

Asimismo, en cuanto a la definición del procedimiento, la citada ley establece en su artículo 2°, inciso e), que es El conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la obligación materia de ejecución coactiva.

Como señala SOTELLO (1996), el procedimiento de cobranza o ejecución coactiva es por esencia un procedimiento de naturaleza administrativa. Ello tanto por que se pretende que la propia administración pública satisfaga sus legítimas pretensiones respecto de sus deudores –razón por la cual, sin necesidad de recurrir a instancia u órgano distinto, es la misma administración la que ejecuta al administrado– como por que este procedimiento no tiene por finalidad la resolución de asunto alguno, sea controvertido o no (p. 233).

Resulta interesante citar, para resaltar la naturaleza jurídica del procedimiento de ejecución coactiva, el segundo párrafo del Fundamento V de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 06269-2007-PA/TC. En él se precisa que: “La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo que estas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo de deudas exigibles (sean tributarias o no). En efecto, dentro de las facultades inherentes a la administración tributaria encontramos una representada por el denominado “principio de autotutela”, el cual permite a esa administración hacer cumplir sus actuaciones sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.

Cabe recordar que la facultad de autotutela responde a la ejecutoriedad de los actos administrativos, cuyo sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118° de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

Por otro lado, si la finalidad del procedimiento coactivo instaurado en contra del administrado pretende la recuperación de obligaciones tributarias, entonces los actos de coerción se sustentan además en el carácter público de las prestaciones tributarias, que sirven para financiar obras y servicios públicos; por tanto, para las Administraciones Tributarias la ejecución coactiva se trata de un procedimiento administrativo en mérito a su función recaudadora, que tiene la finalidad de obtener el importe de la deuda a favor de la entidad, siempre que ésta sea considerada exigible coactivamente.

Al respecto, el inciso a) y d) del numeral 25.1 del art.25 del TUO de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, considera deuda exigible coactivamente aquellas deudas establecidas mediante Resolución de Determinación o Resolución de Multa, emitidas conforme a ley, debidamente notificadas y no reclamadas en el plazo de ley; asimismo, a la deuda que conste en una Orden de Pago emitida conforme a ley

En efecto, MOREANO VALDIVIA (2014) señala que tratándose de deudas tributarias cuyo pago es omitido a la administración tributaria por un acto voluntario, esta tendrá el imperativo de cobrarlas utilizando diversos mecanismos de coacción o coerción, pero que solo se podrá efectivizar una vez iniciado el procedimiento de cobranza o ejecución coactiva –cuyo único titular es el ejecutor coactivo– el cual tiene por objeto la recuperación de la deuda a cargo de los administrados tributarios que hayan incumplido su pago oportuno o no la hubieran impugnado en el plazo legal establecido (p.30).

De lo expuesto, queda claro que si el Ejecutor Coactivo es el responsable del inicio, prosecución y suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, entonces ninguna autoridad u órgano administrativo o político podrá suspender el procedimiento coactivo, con excepción del Ejecutor, que deberá hacerlo cuando se configure cualquiera de las causales de suspensión descritas en el numeral 16.1 del art. 16 concordante con el art. 31 del TUO de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, para luego proceder al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado, según lo establecido por el numeral 16.5 del mismo artículo.

Asimismo, el legislador agrega una causal más, según el numeral 23.3 del art. 23 de la mencionada Ley, la misma que somete la suspensión del procedimiento al criterio del propio deudor tributario, pues establece que “La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley”.

En principio, podemos entender que el legislador ha considerado que la autotutela, no implica el desamparo de los derechos del administrado; por tanto, el numeral 23.3 del art. 23° del TUO de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, establece la posibilidad de que el obligado someta a revisión judicial este procedimiento, a través de una demanda que tenga por finalidad, revisar la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para la ejecución coactiva.

Sin embargo, a tenor del propio artículo, se advierte que el deudor tributario puede obtener la inmediata suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva, si es que interpone una demanda de revisión judicial ante el Poder Judicial. Al respecto no debemos confundir, el artículo no se exige un pronunciamiento judicial (sentencia), ni tampoco el dictado de una medida cautelar dentro o fuera del proceso; en verdad, ni siquiera se exige que la demanda interpuesta se encuentre admitida a trámite (auto admisorio). Para ser claro, sólo se requiere la constancia de recepción de la demanda presentada ante la mesa de partes del Poder Judicial para suspender un procedimiento de ejecución coactiva.

Al respecto, resulta conveniente citar la RTF N° 1455-3-2010, la cual constituyente resolución de observancia obligatoria, donde el Tribunal Fiscal señala lo siguiente: “(...) cuando la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva establece que la presentación de la demanda de revisión judicial suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, ello se producirá incluso si aquella fuese presentada ante una autoridad judicial que no sea la competente, para emitir pronunciamiento sobre la legalidad del referido procedimiento, pues a tal efecto basta la sola presentación de la demanda (...)”

En consecuencia, en perjuicio de la facultad de autotutela de la administración tributaria, el deudor tributario puede exigir la suspensión del procedimiento coactivo invocando la sola presentación de su demanda de revisión judicial, la cual deberá presentarla conjuntamente con su solicitud. Por lo cual, el ejecutor coactivo verificará la producción de tal ocurrencia y de ser así, ordenará la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.

Por tanto, de ningún modo, puede evaluar las razones o los argumentos que sustentan la demanda de revisión judicial, lo que pueda expresarse en ella no es relevante ni será materia de juicio por parte del ejecutor coactivo, basta, como se ha dicho, su simple interposición. Esto posibilita que, con o sin razón, el administrado pueda interponer una demanda de revisión judicial y obtenga –automáticamente- la suspensión del procedimiento.

Asimismo, la inmediatez a que alude el numeral 23.3 del art. 23 del TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva se encuentra referida a la no exigencia de requisitos adicionales o dilaciones indebidas por parte del ejecutor, quien simplemente deberá analizar que efectivamente se cumplan el presupuesto previsto en la ley para proceder a ordenar la suspensión del procedimiento con el correspondiente levantamiento de medidas cautelares. Por ejemplo, tras la presentación de la demanda de revisión judicial por parte del Sr. Martin Ecdar Ore Basilio en contra del expediente coactivo N° 014-2016-JRM-EC-MDH tramitado por la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el Ejecutor Coactivo de la entidad suspendió la cobranza y procedió al levantamiento de la medida cautelar de embargo en forma de RETENCIÓN con la respectiva devolución del cheque remitido por el Banco SCOTIABANK, pese a contar con la suma que satisfacía la deuda tributaria.

Esta situación es provocada por la inocultable voluntad del legislador de favorecer al deudor tributario en contra de la exigibilidad de la deuda, pues la finalidad del artículo 23° del TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, será que la suspensión del procedimiento conlleve como efecto inmediato el levantamiento

de los embargos trabados, pues el mandato del numeral 16.5 al que nos remite el numeral 23.3 es claro en tal sentido; por tanto, la norma afecta deliberadamente la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva, que siendo un procedimiento administrativo para el cobro de deudas tributarias, se cuestiona su exigibilidad a voluntad del deudor, permitiendo la dilación en la recuperación de la deuda.

En consecuencia, bajo el supuesto del numeral 23.3 del art. 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, las administraciones tributarias se encuentran en estado de indefensión frente a la voluntad del deudor, pues la espera del pronunciamiento de la Corte Superior supone la paralización de los actos de coerción (autotutela), que cumplen la función primordial de garantizar el pago de la deuda tributaria, máxime, si tras el reinicio del procedimiento coactivo, las medidas cautelares que se traben, en adelante posiblemente resulten infructuosas por la insolvencia oportuna del deudor.

Por tanto, la utilidad de esta investigación radica en el hecho que el procedimiento de ejecución coactiva, no se vea afectada por actos dilatorios practicados por los administrados, originados por la aplicación del numeral 23.3 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que además, no establece control alguno e incentiva prácticas elusivas; por lo que urge, un mejor tratamiento de esta hipótesis legal, con la modificación del citado artículo, en la cual permita la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin que ello implique el levantamiento de las medidas cautelares trabadas, a fin de ser considerada como verdadera causal de suspensión de la cobranza, sin desnaturalizar este procedimiento como manifestación de la facultad de autotutela

1.1.2. Enunciado del problema

¿La sola presentación de la demanda de revisión judicial como causal de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, descrita en el numeral 23.3 del art. 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, afecta la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva de la Administración Tributaria?

1.2. Hipótesis

La sola presentación de la demanda de revisión judicial como causal de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, descrita en el numeral 23.3 del art. 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, afecta la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva de la Administración Tributaria; toda vez, que vulnera la facultad de autotutela para ejecutar deudas exigibles coactivamente, resultando necesario la modificación del numeral 23.3 del citado artículo

1.2.1. Variables

1.2.1.1. Variable Independiente

Demanda de revisión judicial.

1.2.1.2. Variable Dependiente

La naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la sola presentación de la demanda de revisión judicial como causal de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, descrita en el numeral 23.3 del art. 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, afecta la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva de la Administración Tributaria.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Explicar la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva de las Administración Tributaria.
- Analizar los alcances del numeral 23.3 del art. 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 como causal de suspensión del procedimiento coactivo.
- Describir la afectación de la facultad de autotutela por la inejecución de las deudas exigibles coactivamente.

1.4. Justificación

En principio, debemos resaltar la importancia del tema, pues la captación de ingresos es la preocupación de todo gobierno local, especialmente en la recaudación de tributos, donde el procedimiento de ejecución coactiva constituye un mecanismo vital para el cumplimiento forzado de las acreencias impagas; toda vez, que la administración tributaria al gozar de autonomía administrativa, se vale de esta facultad para alcanzar sus metas de recaudación, obteniendo ingresos para el cumplimiento de sus fines.

En tal sentido, la utilidad de este trabajo se construye a partir de la idea, que el procedimiento coactivo instaurado por la Administración Tributaria no se vea afectado en su naturaleza, por actos dilatorios formulados por los contribuyentes a partir de la causal de suspensión descrita en el numeral 23.3 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva; lo cual, supone una modificación urgente del artículo, a fin de ser considerada como una causal válida para la suspensión de la cobranza coactiva, sin desnaturalizarla.

CAPÍTULO 2. Marco teórico

2.1. Antecedentes

Tras el impacto causado por la vigencia de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Ley N° 26979, y su implementación a través de las oficinas de ejecutoría coactiva de las Municipalidades, existen diversos trabajos de investigación por parte de autores que intentan profundizar el estudio de dicha cobranza, pero asumiendo criterios distintos.

En principio, podemos considerar el trabajo de ALARCÓN (1971) – Perú, titulado “El Procedimiento Administrativo de Cobranza Coactiva en el Perú”, desarrollado para obtener el título profesional de Abogado, quién concluye que la cobranza coactiva obedeciendo a su finalidad debe tener mayor celeridad, en razón de que el contribuyente conoce su obligación, por la notificación que le hace la entidad Administradora del tributo, teniendo la posibilidad de reclamar sobre ella en caso que no se estuviera de acuerdo con el monto de la misma, y acogiéndose a los recursos legales para su modificación o anulación, siendo conveniente que de inmediato se proceda a la cobranza, por tanto es necesario establecer un plazo perentorio menor a fin de evitar que se congestione la entidad recaudadora con cobranzas coactivas, que el mismo volumen hace que este sea más lento.

Bajo la misma postura, podemos citar el trabajo de BENDEZU (1975) – Perú, titulado “El Procedimiento Coactivo” realizada para la obtención del título profesional de Abogado, dicho autor concluye que la cobranza coactiva debe tener mayor celeridad, ser más rápido, en razón de que el contribuyente conoce de la notificación que le hace la entidad administrativa tributaria sobre su deuda impaga.

Por su parte, tenemos el trabajo de LÓPEZ (1998) - Perú, titulado “El Abuso del Derecho en el Procedimiento de La Cobranza Coactiva”, cuya investigación fue desarrollada para la obtención del título profesional de Abogado, donde se concluye que, si bien la deuda municipal tiene su origen principalmente en la incapacidad de pago de los contribuyentes, también es verdad que un hay mayor porcentaje de cobranzas coactivas que son indebidos, por lo que concluye, que el Estado a fin de recaudar y recuperar los tributos y adeudos de otra naturaleza, ha expedido una serie de dispositivos que lo benefician en exceso, ello sin contar que en la realidad, los servidores y funcionarios de la Administración que pertenecen al grupo político de turno, ejecutan la cobranza coactiva de acuerdo a beneficios propios.

Por último, citamos la tesis de CARBAJAL, (2016) – Perú, titulada “La Demanda de Revisión Judicial y su afectación a la Cobranza Coactiva del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, año 2012”, desarrollada para obtener el Grado de Maestro en Derecho, donde la autora concluye que como consecuencia de la presentación de la demanda de revisión judicial, existe una vulneración a la tutela cautelar en la Cobranza Coactiva.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. La Naturaleza del Procedimiento de Ejecución Coactiva

2.2.1.1. Concepto

Según GARCIA DE ENTERRIA el procedimiento de ejecución coactiva “nace como una manifestación de la Autotutela de la Administración, en el sentido que es el procedimiento que utilizan las entidades de la Administración Pública para hacer efectivo el acto administrativo que estas emiten frente a los administrados” (p.745).

Para HINOSTROZA (2001), el procedimiento de ejecución coactiva “constituye la cobranza coactiva una facultad propia del Estado. Solo este puede iniciarla, con el objeto de recuperar sus bienes o recabar sus rentas impagas. Advertimos que debe una obligación previa, la misma que ha sido incumplida, para poder ejercitar la acción coactiva. De ello se desprende que la obligación tendrá que sea cierta, fidedigna y acreditada en forma indubitable. Por tal razón se niega a este procedimiento su carácter singular y es comparado con uno de ejecución debido a que la demanda coactiva deberá aparejar como instrumento de ejecución la resolución de determinación, resolución de multa o la orden de pago pertinente, que demostraran la certeza de una obligación para con el Estado incumplida. Al respecto, reiteramos la naturaleza administrativa de este procedimiento, no obstante las coincidencias que puede tener con el proceso de ejecución en cuanto al valor probatorio del documento ejecutable y a su celeridad” (pág. 26).

Por su parte, el Tribunal Fiscal mediante RTF N° 01455-3-2010 ha definido al procedimiento de ejecución coactiva como el conjunto de actos de coerción que las

distintas entidades de la Administración Pública llevan a cabo para realizar el cobro o la ejecución forzosa de obligaciones de Derecho Público. El mismo constituye una manifestación de la autotutela ejecutiva de la Administración Pública y es expeditivo porque tiene por objeto el cobro forzoso tanto de las obligaciones de carácter público de carácter no tributario de las entidades de la Administración Pública y las obligaciones tributarias de los Gobiernos Locales.

2.2.1.2.Naturaleza

Para SOTELO (1996) “el procedimiento de cobranza o ejecución coactiva es por esencia un procedimiento de naturaleza administrativa. Ello tanto por que se pretende que la propia administración pública satisfaga sus legítimas pretensiones respecto de sus deudores –razón por la cual, sin necesidad de recurrir a instancia u órgano distinto, es la misma administración la que ejecuta al administrado– como por que este procedimiento no tiene por finalidad la resolución de asunto alguno, sea controvertido o no”. (p. 233).

Según, DANÓS ORDÓÑEZ (1999), respecto de la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva, sostiene que “mediante el procedimiento de ejecución o cobranza coactiva, las entidades que forman parte de la administración pública persiguen el cobro forzoso de acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho público, independientemente de la facultad del obligado, estando facultadas para detraer del patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado”(p. 14).

Asimismo, para resaltar la naturaleza jurídica del procedimiento de cobranza o ejecución coactiva, resulta interesante citar el segundo párrafo del Fundamento V de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 06269-2007-PA/TC. En él se precisa que: “La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo que estas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo de deudas exigibles (sean tributarias o no). Tal como lo indicó este Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 0015-2005-AI/ TC, la facultad de autotutela de la administración pública de ejecutar sus propias resoluciones –como sucede en el caso del procedimiento de ejecución coactiva– se sustenta en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas”. En efecto, dentro de las facultades inherentes a la administración tributaria encontramos una representada por el denominado “principio de autotutela”, el cual permite a esa administración hacer cumplir sus actuaciones sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.

2.2.1.3.Características

Para DE LA GARZA (1979) las características del procedimiento de ejecución coactiva son:

- Se impulsa de oficio. Lo inicia el ejecutor y una vez iniciado no podrá suspenderlo o concluirlo, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.
- Se fundamenta en el principio de celeridad procesal. Es expeditivo, breve y de ejecución. El procedimiento no admite demora ni dilación.
- Prima en él el interés público sobre el interés particular. Se da preferencia a lo demandado por la administración tributaria, pues se presume su verosimilitud.

- Hay responsabilidad de los funcionarios que intervienen en el procedimiento. Tanto el ejecutor como el auxiliar coactivo son responsables administrativa, civil y penalmente de la forma como se realiza la cobranza coactiva.
- Es un procedimiento compulsivo. De no cumplir el deudor con el pago de su deuda, se procede a dictar medidas cautelares como las de embargo y de ser el caso de ejecución.
- Es un procedimiento inimpugnable. Los recursos impugnativos solo proceden si se ha agotado la vía administrativa, con excepciones como el proceso de amparo con medida cautelar y la queja. De la Garza señala como característica del procedimiento de cobranza o ejecución coactiva, además de su carácter administrativo, el recaudatorio. Ello, en tanto tiene por finalidad obtener “el importe de lo debido por virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntariamente por el deudor de ese crédito” (p. 756).

2.2.1.4.Marco Legal

El procedimiento de ejecución coactiva aplicable a las obligaciones no tributarias se encuentra regulado por la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 069-2003-EF. Asimismo, en algunos casos será necesario recurrir a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil.

2.2.1.5.Sujetos Intervinientes

Ejecutor Coactivo

Según HUAMANI (2007) “el ejecutor coactivo es el funcionario de la administración que, con la colaboración de los auxiliares coactivos, ejerce las acciones de coerción

para el cobro de las deudas exigibles; es el responsable y titular de la facultad coactiva” (p. 700).

Para VILLEGAS (2005) “es un funcionario de la Administración Pública, nombrado específicamente para garantizar el normal funcionamiento de la cobranza coactiva. Tiene como funciones verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva; ordenar, varias o sustituir a su discreción las medidas cautelares; suspender el procedimiento entre otros” (p.235).

Auxiliar Coactivo

Es el colaborador del Ejecutor Coactivo, realiza las acciones y tareas encomendadas por éste, con el propósito de garantizar la eficacia de la cobranza, la celeridad de los procedimientos y el adecuado funcionamiento de la Oficina. Sus facultades y obligaciones son: tramitar con celeridad y custodiar los expedientes coactivos a su cargo; elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del Procedimiento, realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor, suscribir notificaciones y actas de embargo, etc., emitir informes y dar fe de los actos en los que intervienen en el ejercicio de sus funciones¹.

Ejecutado

El literal d) del artículo 2° del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, lo define como toda persona natural, persona jurídica,

¹ Sobre el tema de las facultades y obligaciones del auxiliar coactivo, el cual está prescrito en el artículo 5 del Texto Único de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley 26979, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS

sucesión indivisa, sociedad conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa;

2.2.1.6. Medidas Cautelares

2.2.1.6.1 Concepto

CARNELLUTI (1973) en la definición tradicional de la medida cautelar en tanto el proceso que, sin ser autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso (p.88).

Asimismo SOTELO (1996) señala que “la actuación administrativa debe garantizar o asegurar que las deudas tributarias que sean llevadas al procedimiento de ejecución forzada sean líquidas y que el deudor tributario tenga cabal conocimiento de su existencia y de su estado insoluto” (p. 235).

Según, NIMA (2005) “las medidas cautelares son acciones destinadas a asegurar el pago de la deuda mediante la afectación de uno o varios bienes del presunto deudor, ante eventuales actos del deudor que pudieran obstaculizar su cobranza. Estas medidas serán trabadas por el ejecutor coactivo, una vez transcurrido el plazo otorgado en la resolución de ejecución coactiva” (p. 207).

Para HUAMÁN (2005) la Medida Cautelar “es una potestad o privilegio de la Administración, y su fundamento es el de asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general representado por la Administración” (p.165).

2.2.1.6.2 Finalidad

Para GABERL (2012) “asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en sentencia estimatoria que se dictare “o si se prefiere medidas conducentes “a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendency del proceso correspondiente”. (p.32).

Según CALAMADREI (2012) la finalidad de las medidas cautelares es, pues, diáfananamente clara. Con ellas se intentan normativamente asegura que la futura resolución que se dicte como culminación del proceso declarativo pueda llevarse a la práctica de modo útil, pueda, en suma, ser ejecutada con todas las probabilidades de éxito. Ello determina que dichas medidas se sitúen, como en su día pusiera de manifestó.

2.2.1.6.3 Requisitos

Según CASSAGNE (2007) “si bien la doctrina procesal establece requisitos para la aplicación de medidas cautelares previas como son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la adecuación; en el campo tributario no hay norma expresa al respecto porque las medidas cautelares previas se adoptan en el marco de las facultades discrecionales y extraordinarias con las que cuenta la Administración Tributaria en el procedimiento de recaudación” (p. 269).

Sin embargo, el Tribunal Fiscal en la resolución N° 10907-5-2008 ha establecido requisitos mínimos que la Administración Tributaria debe considerar para ordenar una medida cautelar previa:

- i. la verosimilitud de la deuda tributaria, debiendo acompañarse los medios probatorios que correspondan
- ii. el peligro irreparable que conllevaría esperar el fallo definitivo sobre la deuda tributaria, para lo cual se deberá demostrar el acaecimiento de algunos de los casos a que se refiere los incisos a) al l) del artículo 56° del Código Tributario, por los cuales el comportamiento del administrado daría mérito a la adopción de la medida, o algún indicio que lleve a presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa.

2.2.1.6.4 Clases

Estas medidas cautelares van a ser implementadas en el supuesto que el obligado al pago de la deuda tributaria contenida en el correspondiente valor, no se realice dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado con la Resolución de Ejecución Coactiva; igualmente, los Ejecutores Coactivos podrán ejecutar, en calidad de medida cautelar previa, únicamente el embargo en forma de intervención en información, conforme lo establece el numeral 28.1 del artículo 28° del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley N° 26979, aprobada mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS-EF. Conforme lo establece el artículo 33° del TUO de la Ley en comento, las formas de embargo son las siguientes:

a) En forma de Intervención en Recaudación, Información o Administración:

El embargo en forma de intervención puede ser en recaudación que afecta directamente los ingresos del deudor, tiene como objetivo embargar los ingresos propios de la empresa (sea de persona natural o jurídica), esta puede recaer sobre actividades dedicadas al comercio formal o informal; la intervención en información, que consiste en recibir información del movimiento económico del deudor y situación patrimonial; o en administración de bienes, que tiene la finalidad de recaudar los frutos o utilidades que producen los bienes embargados.

b) En forma de Depósito o Secuestro Conservativo:

Esta forma de embargo puede ser con o sin extracción de bienes. Se ejecuta sobre los bienes y/o derechos que se encuentran en cualquier establecimiento del deudor tributario, inclusive los comerciales o industriales, u oficinas profesionales independientes, aun cuando se encuentren en poder de un tercero.

c) En forma de Inscripción:

Por medio del embargo en forma de inscripción, la Administración Tributaria afecta bienes muebles o inmuebles registrados, inscribiéndose la medida por el monto total o parcialmente adecuado en los registros respectivos, siempre que sea compatible con el título ya inscrito. El importe de las tasas registrales deberá ser pagado por la Administración Tributaria con el producto del remate.

d) En forma de Retención:

Comenzaremos citando a DANOS ORDOÑEZ(1999) quien comenta que mediante esta forma de embargo, la administración tributaria ordena a un tercero(entidad

bancaria o financiera) que suspenda los pagos que se le hace al embargado y los guarde en forma de depositario, por otro lado, este medio de embargo es el principal e idóneo para hacer efectivas la acreencias de la Administración Tributaria, pues mediante la retención del dinero en efectivo por parte de las entidades del sistema financiero y otras en virtud al mandato expedido por resolución del Ejecutor Coactivo se cumple la finalidad de extinguir la obligación tributaria, sin necesidad de embargar bienes muebles e inmuebles a fin de hacer efectivo el cobro, lo cual encarece los costos de la Administración.

Para GONZALES (2010), señala que en el embargo en forma de retención, el Ejecutor Coactivo está facultado para ordenar la retención y posterior entrega de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodias y otros, así como retención y posterior entrega de los derechos de créditos de los cuales el deudor sea titular, que se encuentren en poder de terceros. En tal sentido, son requisitos necesarios para que proceda la ejecución coactiva: que la deuda tributaria se encuentre contenida en un valor; que se notifique al deudor tributario para que proceda a su pago en los plazos que establece la ley; que tal cumplimiento no se haya producido y que finalmente el valor cumpla con todos los requisitos para su validez, debiendo constar el cargo debidamente notificado².

² Sobre el tema de la notificación debida debe tenerse presente lo dispuesto en la RTF N° 861-2-2001, RTF N° 00263-1-2003 y RTF N° 05387-1-2003 a las que nos referiremos más adelante.

2.2.1.6.5 La Obligación Tributaria

En principio MARGAIN (2009) señala que la obligación tributaria es “el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige de un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie” (p.78).

Para el tratadista GIULIANI (2004) “es una prestación jurídica patrimonial, constituyendo, exclusivamente, una obligación de dar, de entregar sumas de dinero en la generalidad de los casos o dar cantidades de cosas, en las situaciones poco frecuentes en la que el tributo es fijado en especie, para que el Estado cumpla sus cometidos, pero siempre se trata de una obligación de dar”. (p. 67).

Asimismo, DE JUANO (1936) sostiene que la obligación tributaria, constituye en esencia “una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre el sujeto (contribuyente) a favor del Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder de imperio” (p.369).

Con respecto a la Relación Jurídica Tributaria, FRANCISCO DE LA GARZA (1998) sostiene que de “la realización del presupuesto legal o hecho imponible, es decir el hecho previsto por las leyes que genera el gravamen, surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales: un acreedor y un deudor y en el centro un contenido, que viene a ser la prestación del tributo”. (p.446).

2.2.1.6.6 Deuda Exigible Coactivamente

Para DANO ORDONES (1999) las deudas exigibles en la cobranza coactiva “son aquellas deudas cuya existencia está amparada por un acto administrativo válido que determine el importe de lo debido y que haya sido debidamente puesto en conocimiento del particular para darle la posibilidad de proceder al pago voluntario de la deuda o, en caso de disconformidad, para permitirle la impugnación de la legalidad de dicho acto administrativo” (p.48).

Según el numeral 25.1. del artículo 25 del TUO de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, se considera deuda exigible: a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la Entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley; b) La establecida por resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal;; y, d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley y debidamente notificada, de conformidad con las disposiciones de la materia previstas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.

2.2.1.6.7 Inicio del Procedimiento de Ejecución Coactiva

El artículo 29° del TUO de la Ley Procedimiento Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, establece que el Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar.

2.2.2. La Revisión Judicial

2.2.2.1. Definición

Para HUAYAPA (2010) la demanda de revisión judicial “es un mecanismo de impugnación directo contra las irregularidades y/o contravenciones del ordenamiento en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva. El sustento de dicho procedimiento lo encontramos en el artículo 148° de la Constitución, el cual señala que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”. (p.24).

Por su parte, el artículo 23° del TUO de la Ley Procedimiento Ejecución Coactiva señala que dicho proceso tiene como finalidad la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución coactiva. Para estos casos su procedencia está sujeta al cumplimiento de una condición consistente en la previa terminación del procedimiento de ejecución coactiva, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo así lo declare. Se asemeja en gran medida a la queja que se interpone ante el Tribunal Fiscal, ya que no se permite un cuestionamiento de fondo sino de forma. Se trata de un proceso contencioso administrativo de carácter especial, puesto que aquí no se va a discutir la validez de una decisión administrativa sino simplemente el cumplimiento por parte del ejecutor coactivo de las normas que regulan el procedimiento de ejecución coactiva. (MENDOZA UGARTE, 2013, p.14).

2.2.2.2. Requisitos

El numeral 1 del artículo 23° del TUO de la Ley Procedimiento Ejecución Coactiva establece que debe producirse cualquiera de estos dos supuestos para interponerse

válidamente una demanda de revisión judicial: a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la ley. b) Por lo que, a nuestro juicio, no basta que un procedimiento de ejecución coactiva se haya iniciado para poder interponer demanda de revisión judicial. Es indispensable que, previamente, se haya ordenado un embargo en cualquiera de las formas previstas en el artículo 33° de la misma ley (retención, depósito, secuestro, inscripción, etc.). No obstante, en lo que concierne a la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, el Tribunal Fiscal considera que no es relevante si una demanda cumple o no con el requisito del embargo previo, ya que el ejecutor se encontrará siempre obligado a suspender el procedimiento con la sola presentación de la demanda. Esto debido a que el ejecutor no es competente para evaluar si resulta procedente una demanda de revisión judicial sino el órgano jurisdiccional.³

2.2.2.3. Competencia y Vía Procedimental

La demanda de revisión judicial se presenta ante la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial, siendo competente la Sala Contencioso Administrativa del lugar en donde se llevó a cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o la competente en razón del domicilio del obligado. Donde no exista Sala Contenciosa Administrativa será competente la Sala Civil correspondiente y en defecto de ésta, la

³RTF N° 10945-2-2008 del 11/09/2008 y otras

que haga sus veces (numeral 23.8 del TUO de la Ley Procedimiento Ejecución Coactiva).

Como segunda instancia actúa la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República. No procede en estos casos el recurso de casación previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Asimismo, diremos que motivo de amplio debate es el determinar la vía procesal que le corresponde a una demanda de revisión judicial. El numeral 23.2 de la LPEC ordena que se tramite mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, pero resulta que tal artículo ya no existe y en su reemplazo se encuentra el artículo 26°, que ya no regula el proceso sumarísimo sino el proceso urgente dentro del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, el proceso urgente resulta de aplicación en contados supuestos establecidos expresamente en la ley de la materia (artículo 26°), no encontrándose dentro de ellos la interposición de una demanda de revisión judicial. Siendo ello así, en la actualidad se ha convenido en tramitar estas pretensiones conforme al proceso especial previsto en el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En cambio, algunos magistrados prefieren guardar fidelidad al texto de la LPEC y tramitan estas demandas mediante el proceso sumarísimo, que se encuentra regulado, no en la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sino en el Código Procesal Civil.

2.2.2.4. Plazo para interponer la Demanda

Si el procedimiento de ejecución coactiva ha fenecido, el plazo para interponer la demanda será de quince días hábiles desde que es notificada la resolución que pone fin al procedimiento, conforme lo establece el inciso b) del numeral 23.1 de la LPEC. Sí, en cambio, nos encontramos frente a un procedimiento de ejecución coactiva en trámite, el plazo para demandar es indefinido, debido a que puede accionarse en cualquier momento y en cualquier estado del procedimiento.

Ahora, para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la Ley.

Por otra parte, la Corte Superior deberá emitir pronunciamiento sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los documentos presentados. El plazo para resolver la demanda de revisión judicial es de 60 días hábiles. Si la Corte Superior no emite resolución al término de los sesenta (60) días hábiles desde la presentación de la demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante la Corte Suprema, siempre que el demandante a su elección, presente en el proceso póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, emitida por un Banco local de primer orden a nombre de la entidad acreedora por el importe de la obligación renovable cada seis (6) meses; o efectúe la consignación del monto exigido ante el Banco de la Nación, a nombre de la Corte Superior de Justicia. La ejecución de la póliza de caución, carta fianza o la entrega al Ejecutor Coactivo de los fondos consignados sólo procederá cuando medie orden judicial expresa. (FERNANDEZ VENTOSILLA, 2014, p.46).

2.2.2.5. Efectos de la presentación de la demanda de revisión judicial

El numeral 23.3 del artículo 23° del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley 26979 establece que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la mencionada Ley⁴.

2.2.3. La Autotutela de la Administración Tributaria

2.2.3.1. Concepto

La potestad de autotutela, como ha dicho GARCÍA DE ENTERRÍA (1983) expresa una sustancial diferencia entre las Administraciones y los particulares (p.45). En efecto, el particular que desee cambiar una determinada situación de hecho no puede hacerlo por sí solo; toda vez, que el principio de la paz jurídica -origen y fundamento de los Estados- entraña la necesidad de resolver las controversias ante los órganos del Poder Jurisdiccional.

Sin embargo, el maestro CASSAGNE (2002) señalaba que, “la Administración Pública disfruta tradicionalmente en el Derecho peruano de la potestad de tutelar por sí mismas sus derechos e intereses. La Administración está exenta de someter sus pretensiones tanto a proceso declarativo como a proceso ejecutivo. Las decisiones administrativas son ejecutivas y ejecutorias (p. 34).

⁴ Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.

Según, MENDOZA (2007) la autotutela es “el privilegio excepcional de la Administración Pública] de poder resolver sus propias situaciones jurídicas mediante el simple recurso de declarar su propio derecho e imponerlo a su vez a los particulares de manera directa y sin necesidad de intermediación judicial alguna” (p.21).

Para HINOSTROZA (2001) “el principio de derecho público de la autotutela otorga al Estado la potestad de ejercer actos de coerción destinados a ejecutar directamente sus disposiciones y recuperar de ese modo de sus acreencias. Naturalmente que la facultad coercitiva de las dependencias estatales deben tener la correspondiente base legal (constituida por la legislación coactiva) que evite atropellos en contra de los administrados y garantice un estado de derecho”. (p. 31)

Por su parte, SOTELO (1996) señalaba que el privilegio de la ejecución de oficio por su parte de la propia administración pública “importa una verdadera prerrogativa publica como manifestación concreta del principio de autotutela administrativa”. (p.237).

Al respecto, GUZMAN (2007) afirma que “la autotutela administrativa genera que los actos administrativos gocen de ejecutividad y ejecutoriedad, así como el hecho de que estos sean revisados judicialmente con posterioridad a su emisión”. (p.237).

Por su parte TIRADO (2011) argumentaba que la naturaleza y justificación de la existencia de un régimen específico y atributivo de especiales facultades es el servicio al interés general; bajo esta premisa es que el autor ha señalado que “del servicio a los intereses generales derive que la Administración puede venir institucionalmente

caracterizada por la autotutela en la medida en que las potestades propias de esta contribuyan a la consecución de aquel objetivo básico.

Para finalizar, según MORÓN (2002) “la autotutela administrativa es la potestad para ejecutar sus propias resoluciones constituye una de las expresiones más nítidas de la autotutela administrativa con que el ordenamiento legal provee a la Administración Pública para la preservación del orden público y alcanzar la satisfacción de los intereses generales. Ni el recurso administrativo o la demanda judicial afectan esta calidad de la autoridad administrativa”. (p.404.)

2.2.3.2. La Legitimidad de los Actos Administrados

Según DIEZ (1961) “La presunción de legitimidad provee a la certeza en la aplicación de las normas en cuanto permite el inmediato cumplimiento de los actos administrativos, impidiendo toda dilación o suspensión de su obligatoriedad debida al ejercicio de un recurso interpuesto en su contra por un particular, ello ocurre, como consecuencia normal de la presunción, que no cesa hasta tanto no se demuestre lo contrario” (p. 231).

Por otro lado, la función aseguradora de la presunción de legitimidad ha sido reconocida por STASSINOPOULOS (1954) quien señala que “en miras de la seguridad y estabilidad de las situaciones jurídicas, el acto administrativo ha sido promunido de una fuerza ejecutora y de una presunción de validez” (p.38).

2.2.3.3. La Ejecutoriedad y Ejecutividad de los Actos Administrativos

✓ La Ejecutividad

Para empezar citaremos a MORON URBINA (2011) quien señala que “La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad y exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo”. (p.550)

Para TIRADO BARRERA (2011) define “Por Ejecutividad como una característica que tradicionalmente se ha considerado propia de todo acto administrativo, en tanto manifestación de una potestad o atribución pública, como es la de ser plenamente eficaz y constitutivo de las situaciones jurídicas por él definidos desde el momento mismo de su emisión sin que la oposición del particular a través de los medios impugnatorios que la ley pudiera habilitar, pueda impedirlo, sin perjuicio de lo que en sede judicial pudiera disponer”. (p.160)

Por último tenemos a GUZMAN NAPURI (2007) quien dice que “La ejecutividad, es aquella virtud por la cual, los actos administrativos definitivamente firmes, producen por sí mismos los efectos perseguidos de su emanación; es decir la Ejecutividad es la idoneidad de los actos administrativos para obtener el objetivo para el cual ha sido dictado”. (p.207).

✓ La Ejecutoriedad

En principio TIRADO BARRERA (2011) lo define como “todo acto administrativo que imponga una obligación (de dar, hacer o no hacer) a un administrado y que, en

función de su contenido obligacional, puede permitir, llegado el caso, su ejecución forzada en caso de negativa del sujeto administrado”. (p.160) .

Asimismo GUZMAN NAPURI (2007), señala que “la ejecutoriedad del acto administrativo implica que el mismo surte sus efectos sin necesidad de que la administración recurra a otra entidad a fin de que la misma ratifique o haga efectivo el acto. Ello implica que el acto administrativo se ejecuta aun cuando el administrado se ejecuta aun cuando el administrado no se encuentre en conformidad con dicho acto. A su vez, la ejecutoriedad del acto administrativo proviene del denominado privilegio de decisión ejecutoria”. (p.238).

La ejecutoriedad del acto administrativo para MORON URBINA (2011); es una facultad inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto. En tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho.

Asimismo este Tribunal ha dicho que por la *ejecutoriedad del acto administrativo* se habilita a la Administración “*a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la*

ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho. La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto administrativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118.º de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”” (STC 0015-2005-PI/TC, fundamentos 44 y 45).

2.2.3.4. El Procedimiento de Ejecución Coactiva como manifestación de la Autotutela de la Administración Tributaria

Conforme lo señala SANZ (1988) “La irreductible tensión entre Administración pública y Justicia, entre potestades administrativas y garantías judiciales, se presenta con singular vigor en el ámbito de la ejecución forzosa administrativa. Efectivamente, la «autotutela o autodefensa ejecutiva» de la Administración, por la que ésta se halla exenta de la carga de solicitar a los Tribunales la ejecución de sus propias decisiones —pudiendo llevarla a cabo ella misma” (p.p. 367-408).

A decir de DANÓS & ZEGARRA (1999) “la Administración Pública sólo puede ejercer las potestades que el ordenamiento le confiere para recaudar coactivamente sus ingresos o ejecutar forzosamente las obligaciones a su favor cuando éstos se hayan generado como consecuencia de una relación jurídica de carácter público. Tal es el caso de los ingresos tributarios y de otros ingresos que no tienen ese carácter pero que se manifiestan en la potestad de imperio de los poderes públicos, como las multas, etc” (p. 23).

Para finalizar, el Tribunal Constitucional ha establecido que el procedimiento de ejecución coactiva nace como una manifestación de la autotutela de la Administración, “es la facultad que tienen algunas entidades de la administración pública para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma Administración, es decir, las obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para cada Administración, o sea, siempre dentro de un marco normativo” (STC N° 774-1999-AA/TC, fundamento 4).

CAPÍTULO 3. Metodológico

3.1. Tipo de investigación

3.1.1. Por su finalidad

3.1.1.1. Investigación Básica

Tiene como finalidad el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales, se llama básica porque es el fundamento de toda investigación.

Para ANDER-EGG (1987), es la que se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una teoría (p. 68).

Para RUBIO & VARAS, “tiene como finalidad primordial avanzar en el conocimiento de los fenómenos sociales y elaborar, desarrollar o ratificar teorías explicativas, dejando en un segundo plano la aplicación concreta de sus hallazgos. Se llama básica porque sirve de fundamento para cualquier otro tipo de investigación” (Rubio y Varas, 1997, p. 120).

Según la información presentada mostrada en el marco teórico y los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos, se determinará la afectación de la demanda de revisión judicial a la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva aportando conocimiento en el ámbito jurídico.

3.1.2. Por su profundidad

3.1.2.1. Investigación Descriptiva

Nuestra investigación será descriptiva, al seleccionar una serie de conceptos o variables que luego se medirán cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, de describirlas.

Según SABINO (1986) La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada (p. 51).

3.1.3. Por su naturaleza

3.1.3.1. Investigación Documental

Se consultaron libros, artículos y revistas tanto en físico como por vía web, en un promedio de cuarenta (40) autores especialistas en el derecho administrativo y/tributario, relevantes para el desarrollo de la presente investigación.

El investigador extrajo la información recopilada los elementos esenciales de las variables de investigación, así como sus características y dimensiones, que permitieron obtener un conocimiento claro y preciso de la incidencia que tiene una sobre la otra.

3.2. Material de estudio

3.3. Recolección de datos

Con el fin de realizar la recolección de datos, en la presente investigación se han empleado técnicas e instrumentos los cuales son los cuales serán detallados a continuación:

3.3.1. Técnicas.

Fichaje.- Se utilizó esta técnica para facilitar la sistematización bibliográfica acerca del procedimiento de ejecución coactiva y la demanda de revisión judicial, además servirá para la ordenación lógica de los conceptos y el acopio de información en síntesis.

Análisis de Contenido.- Consistió en el estudio de los contenidos de las sentencias de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal referentes a la demanda de Revisión Judicial y su afectación a la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva.

Entrevista.- Utilizamos la entrevista para recopilar información mediante la conversación con funcionarios de la administración tributaria conocedores de la problemática, la misma que será “estructurada” mediante un cuestionario acerca del tema.

3.3.2. Instrumentos

- Fichas
- Protocolo de Contenido
- Cuestionario

CAPÍTULO 4. Resultados y Discusión

4.1 Resultados

4.1.1. Jurisprudencia

Del Tribunal Fiscal

Para nuestra investigación, realizamos la búsqueda de resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal; toda vez que constituye la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera; por tanto, resulta competente para resolver oportunamente las controversias suscitadas entre los contribuyentes y las Administraciones Tributarias.

RTF N° 01144-1-2008	
EXPEDIENTE	12450-2007
ASUNTO	Queja
FECHA	Lima, 29 de Enero de 2008
SUMILLA	Inhibirse del conocimiento de la queja presentada. Se indica que dado que la quejosa ha optado por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que ese Tribunal conozca sobre los cuestionamientos a su legalidad.
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • Que la quejosa señala que la Orden de Pago N° 000039-2005-GR/MSJL girada por Impuesto Predial del año 2001 y segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2002, que sustenta el referido procedimiento no contiene deuda exigible coactivamente, debido a que no le ha sido notificada conforme a ley, por lo que dicho procedimiento debe suspenderse. • Que en respuesta a lo solicitado por este Tribunal mediante

	<p>Proveído N° 01616-1-2007, la Administración remitió el Informe N° 19-2007-SGECT-GR/MSAJL/MCC-AC, en el que señala que mediante Resolución de Ejecución Coactiva N° Uno de 5 de julio de 2007 inició a la quejosa un procedimiento de ejecución coactiva respecto de la deuda contenida en la Orden de Pago N° 000039-2005-GR/MSJL, girada por Impuesto Predial del año 2001 y segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que agrega que debido a que la quejosa ha interpuesto demanda de revisión Judicial ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el procedimiento de cobranza coactiva antes mencionado mediante Resolución N° Ocho, en la que también dispuso que se levantaran las medidas cautelares trabadas hasta que el Poder Judicial emitiera pronunciamiento.
<p>ANÁLISIS DE FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Que de conformidad con el numeral 38.1 del artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, el obligado podrá presentar queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar que lo afectan directamente e infringen lo establecido en su capítulo III, referido al procedimiento de ejecución coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales. • Que el artículo 40° de la mencionada ley, dispone que la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias de los gobiernos locales se regirá según lo dispuesto por el artículo 23° de la referida ley,

	<ul style="list-style-type: none"> • Que el numeral 23.3 de dicho artículo refiere que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, y que será de aplicación lo previsto en el numeral 16.5 del artículo 16° de la Ley. • Que el numeral 16.5 del artículo 16° de la ley en referencia señala que suspendido el procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado. • Que dado que la quejosa ha optado por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del referido procedimiento de ejecución coactiva al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde conocer sobre los cuestionamientos a su legalidad, como lo ha establecido este Tribunal en la Resoluciones N° 01536-5-2005, 03667-1-2005 y 00377-1-2008, entre otras.
--	--

Atendiendo al motivo de la queja presentada ante el Tribunal Fiscal, queda claro que la notificación es una de las diligencias más importantes para la Administración Tributaria, a fin de que el acto administrativo surta efecto frente a los deudores y/o responsables tributarios. En consecuencia, marca de por sí, la pauta en los procedimientos tributarios que lleva a cabo, dentro de los que se puede mencionar, la entrega de valores como la Orden de Pago, la Resolución de Multa Tributaria o la Resolución de Determinación.

Ahora bien, para la notificación de los valores de cobranza el cumplimiento de la normatividad que debe verificarse por parte de los contribuyentes y la propia Administración Tributaria es el texto del artículo 104° del Código Tributario; sin embargo, su inobservancia acarrea futuras nulidades en el trámite del procedimiento posterior, como la cobranza coactiva. Para dichos casos, el art. 38° de la Ley N° 26979 faculta al administrado a interponer queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan el debido procedimiento.

Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal Fiscal resuelve inhibirse del conocimiento de la queja presentada; toda vez, que la quejosa ya había optado por la vía de la revisión judicial en fecha anterior, a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva; por tanto, al haber asumido competencia el Poder Judicial, este colegiado resulta incompetente.

RTF N° 03863-1-2011	
EXPEDIENTE	2295-2011
ASUNTO	Queja
FECHA	Lima, 11 de marzo de 2011
SUMILLA	Se resuelve inhibirse del conocimiento de la queja presentada por iniciarle de manera indebida un procedimiento de cobranza coactiva, en cuanto al cuestionamiento de un expediente coactivo, al verificarse que el quejoso optó por la vía de la revisión judicial a efecto que se emitiera pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que este Tribunal tome conocimiento al respecto.

	<p>Se declara infundada en cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido que se le ha negado el acceso al expediente coactivo, señalándose que éste no ha acreditado de modo alguno su afirmación, así tampoco la vulneración legal, al debido procedimiento, derecho de defensa y otros que alega.</p>
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • Que el quejoso sostiene que la Administración le ha iniciado de manera indebida el procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente N° 00171-2009, toda vez que no ha sido notificado con los valores materia de cobranza ni con la resolución coactiva de inicio conforme a ley. • Que agrega que se le ha negado el acceso al expediente coactivo, y que se ha vulnerado lo previsto en el artículo 160° de la Ley N° 27444, su derecho de defensa, el debido procedimiento y la legalidad. • Que la Administración en respuesta al Proveído N° 604-1-2011 ha remitido el Oficio N° 03-2010-SEC-GR- MVES (foja 39), adjuntando el Informe N° 013-2011-MRMA-SEC-GR-MVES, en los que señala que el procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente N° 00171-2009 se inició al quejoso con relación a la deuda contenida en la Orden de Pago N° 00233-2008, girada por Impuesto Predial de 2006, enero 2007 y primer y segundo trimestre de 2008 (foja 36), y que el 17 de febrero de 2011 el quejoso le solicitó la suspensión del referido procedimiento de ejecución coactiva (foja 26) en atención a la demanda de revisión judicial interpuesta ante la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa

	<p>de la Corte Superior de Justicia de Lima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que obra a fojas 19 a 24 copia de la demanda de revisión judicial presentada por el quejoso ante el Poder Judicial el 17 de febrero de 2011 con relación al procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente Coactivo N° 171-2009, la misma que ha sido signada con Expediente N° 00671-2011-0-1801- SP-CA-04 (foja 24).
ANÁLISIS DE FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • Que de acuerdo con el numeral 38.1 del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, podrá presentarse queja contra las actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar coactivo que afecten directamente al obligado e infrinjan el procedimiento de ejecución coactiva para obligaciones tributarias con los gobiernos locales. • Que el artículo 40° de la citada ley dispone que la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias de los gobiernos locales se regirá según lo dispuesto por el artículo 23° de la referida ley. • Que asimismo el numeral 23.3 del artículo 23° de la referida ley precisa que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior. • Que toda vez que el quejoso optó por la vía de la revisión judicial a efecto que se emitiera pronunciamiento sobre la legalidad del

	<p>procedimiento de ejecución coactiva — Expediente Coactivo N° 00171-2009 materia de queja, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que este Tribunal tome conocimiento al respecto, criterio establecido por este Tribunal en diversas resoluciones, tales como las N° 01413-5-2006, 01144-1-2008 y 01455-3-2010; por lo que corresponde inhibirse de la queja en este extremo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que sin perjuicio de lo mencionado, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el numeral 23.3 del artículo 23 antes citado, la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, asimismo, de acuerdo a lo previsto en el numeral 16.5 del artículo 16° de la citada ley, en tal supuesto procederá el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado, de ser el caso. • Que en cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido que se le ha negado el acceso al expediente coactivo, cabe señalar que éste no ha acreditado de modo alguno su afirmación, así tampoco la vulneración legal, al debido procedimiento, derecho de defensa y otros que alega, por lo que la queja resulta infundada en tales extremos.
--	--

En el siguiente caso, la queja presentada se fundamenta en la Administración le ha iniciado de manera indebida el procedimiento de ejecución coactiva; toda vez que no ha sido notificado

con los valores materia de cobranza ni con la resolución coactiva de inicio, pese a que el numeral 15.2 del art. 15 del TUO de la Ley 26979, establece que la resolución de ejecución coactiva, bajo sanción de nulidad, será acompañada de la copia de la resolución administrativa, su correspondiente constancia de notificación y recepción en la que figure la fecha en que se llevó a cabo, así como la constancia de haber quedado consentida o causado estado.

Por tanto, su incumplimiento podrá ser materia de revisión por parte del Tribunal Fiscal vía queja, según el art. 38° de la mencionada Ley; sin embargo, en el presenta caso dicho colegiado resuelve inhibirse, al verificarse que el quejoso optó por la vía de la revisión judicial, a efecto que se emitiera pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que dicho Tribunal tome conocimiento al respecto.

RTF N° 08202-1-2011	
EXPEDIENTE	4706-2011
ASUNTO	Queja
FECHA	Lima, 17 de mayo de 2011
SUMILLA	Se inhibe del conocimiento de la queja representada por iniciarle de manera indebida un procedimiento de ejecución coactiva y no haber respuesta a su solicitud de suspensión de procedimiento de ejecución coactiva, al verificarse que la quejosa optó por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva seguido, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que este Tribunal

	<p>tome conocimiento al respecto. Se declara sin objeto emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de suspensión de procedimiento de ejecución coactiva al verificarse que la Administración en virtud a la referida demanda de revisión judicial ha dispuesto la suspensión del referido procedimiento de ejecución coactiva y el levantamiento de las medidas cautelares trabadas después de la formulación de la queja.</p>
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • Que la quejosa sostiene que se le ha iniciado indebidamente un procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente N° 2010-011530, toda vez que los valores objeto de cobranza no le han sido notificados, vulnerándose su derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo, sin embargo, el Ejecutor Coactivo ha trabado embargos en forma de retención sobre sus bienes, valores y acciones de su propiedad. • Que agrega que la Administración no ha dado respuesta a su solicitud de suspensión de procedimiento de ejecución coactiva de fecha 14 de marzo de 2011. • Que de la revisión del escrito presentado se aprecia que la quejosa formula queja por: i) el inicio indebido del procedimiento de ejecución coactiva - Expediente Coactivo N° 2010-011530, y ii) que la Administración no ha dado respuesta a su solicitud de suspensión de procedimiento de ejecución coactiva de fecha 14 de marzo de 2011. • Que la Administración en respuesta a lo solicitado por este Tribunal mediante Resolución N° 07008-1- 2011, remitió el Oficio N° 0201-2011-0600-SG/MSI (foja120) adjuntando el

	<p>Memorándum N° 182-2011- 11.3.0-SEC-CAT/MSI (fojas 111 y 112), Informes N° 154-2011-1100-CAT-MSI y 1708-2011-1110-SRFT-CAT-MSI (fojas 118 y 119) y diversa documentación sustentatoria, en los que señaló, entre otros, que mediante Resolución de Ejecución Coactiva N° Uno- Expediente N° 2010-011530 inició a la quejosa procedimiento de ejecución coactiva respecto de la deuda contenida en la Resolución de Determinación N° 2006-008077 y las Órdenes de Pago N° 2008-005392-1120-SCR-CAT/MSI a 2008-005397-1120-SCR-'08202-1-2011CAT/MSI; y que, si bien ordenó trabar embargos sobre los bienes de la quejosa, mediante la Resolución NO Treinta de 13 de abril de 2011 suspendió dicho procedimiento de ejecución coactiva debido a que ésta con fecha 5 de abril de 2011 (Expediente Judicial N° 01297-2011) interpuso demanda de revisión judicial respecto de dicho procedimiento, asimismo, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de embargo trabadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que obra a foja 78 copia del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial presentada por la quejosa ante el Poder Judicial el 5 de abril de 2011, la misma que ha sido signada con Expediente N° 01297-2011-0-1801-SP-CA-01. • Que asimismo obra a foja 77, copia de la Resolución Coactiva N° Treinta emitida con relación al Expediente Coactivo N° 2010-0011530 materia de queja, en la que la Administración en virtud a la referida demanda de revisión judicial ha dispuesto la suspensión del referido procedimiento de ejecución coactiva y el
--	---

	<p>levantamiento de las medidas cautelares trabadas, de conformidad con lo normado en el artículo 23° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que según se verifica del cargo de notificación obrante a foja 77 vuelta, la mencionada Resolución Coactiva N° Treinta fue debidamente notificada en el domicilio fiscal de la quejosa el 28 de abril de 2011, mediante constancia de negativa a recepción con sujeción a lo establecido en el artículo 21° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
<p>ANÁLISIS DE FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Que de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, el obligado podrá presentar queja contra las actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar coactivo que lo afecten directamente e infringen el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias con los gobiernos locales. • Que conforme al inciso a) del numeral 23.1 del artículo 23° de la citada norma, el obligado está facultado a interponer demanda ante la Corte Superior, con la finalidad que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, cuando iniciado el mismo se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia y otros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la citada ley. • Que el numeral 23.3 de dicho artículo refiere que la sola

	<p>presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el numeral 16.5 del artículo 16 de la ley antes citada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que el numeral 16.5 del artículo 16° de la misma ley precisa que suspendido el procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.• Que de acuerdo al numeral 21.3 del artículo 21° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1029, en el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalará la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, y si esta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado y se dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.• Que en tal sentido, toda vez que la quejosa optó por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente Coactivo N° 2010-011530, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no corresponde que este Tribunal tome conocimiento al respecto, criterio establecido por este Tribunal en diversas resoluciones, tales como las N° 01413-5-2006, 01144-1-2008 y 01455-3-2010; por lo que
--	--

	<p>corresponde inhibirse de la queja en este extremo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que de otro lado, habiendo la Administración ordenado la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva del referido Expediente Coactivo N° 2010-0011530 el 28 de abril de 2011, no resulta pertinente considerar que el Ejecutor Coactivo se encuentra obligado a dar respuesta de modo independiente a la solicitud de suspensión formulada por la quejosa, respecto del mismo expediente coactivo, con fecha 14 de marzo de 2011, procediendo considerar, por tanto, en este extremo que han desaparecido los hechos que originaron la queja, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el particular.
--	---

De acuerdo a la queja presentada, se advierte que la Administración Tributaria no solo ha omitido notificar los valores de cobranza a efecto de poder ejercer la reclamación correspondiente, respetando el derecho de defensa, sino que además, la ejecutoría coactiva no ha dado respuesta a su solicitud de suspensión de procedimiento de ejecución coactiva.

Al respecto, el numeral 31.6 del art. 36° del TUO de la Ley N° 26979 establece que a excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Por tanto, resulta aplicable la interposición de la queja ante el Tribunal Fiscal, el mismo que debe resolver dentro de los 20 días hábiles, según el numeral 38.2 del art. 38° de la norma en comento.

Empero, como bien señala el Tribunal Fiscal en la presente resolución, no le corresponde tome conocimiento acerca de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, toda vez,

que la quejosa optó por la vía de la revisión judicial, por tanto resuelve inhibirse de la queja presentada por el administrado al haber asumido competencia el Poder Judicial.

RTF N° 02107-5-2012	
EXPEDIENTE	752-2012
ASUNTO	Queja
FECHA	Lima, 09 de febrero de 2012
SUMILLA	Se declara inhibirse del conocimiento de la queja respecto del cuestionamiento de un expediente coactivo, toda vez que la quejosa ha optado por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento respecto de la legalidad del procedimiento. Se declara infundada en el extremo del otro procedimiento coactivo, debido a que dicho procedimiento ha sido dado por concluido por la Administración mediante resolución coactiva notificada a la quejosa.
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> Que, la quejosa sostiene que resulta improcedente la cobranza coactiva seguida mediante los Expedientes N° 004064-2010-1-CH-0, 006917-2010-1FN, 010829-2008-1FN-R, 006531-2009-1CH-R, 007237-2009-1CH-R, 010079-2009-1FN-R, 018541-2009-1CH-R, 019520-2009-1FN-R, 0019832-2007-1FN-R, 002594-2008-1CH-R, y que mediante las Resoluciones N° 13640-5-2008, 12169-2-2010 y 05948-7-2009, este Tribunal ha establecido que la Municipalidad Distrital de Lince no se encuentra legitimada para efectuar el cobro de Arbitrios Municipales de los años 2006 y 2007.

	<ul style="list-style-type: none"> • Que, agrega que pese a haber interpuesto reclamo contra los Arbitrios Municipales de los años 2006 a 2008 se procedió a trabarle embargo en forma de retención en su contra en su cuenta del Banco de Crédito, por lo que se solicita la aplicación del criterio establecido en la Resolución N° 05948-7-2009, referido a la devolución del monto indebidamente embargado. • Que, mediante escrito ampliatorio de su queja de 24 de enero 2012, la quejosa señala haber interpuesto el 18 de enero de 2012, demanda de revisión judicial al amparo del artículo 23.3 del texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, no obstante refriere que aún no se ha levantado el embargo trabado en su cuenta del banco de Crédito, el cargo de notificación de dicha no encuentra arreglado a ley, por cuanto la referida resolución no le fue notificada al banco de Crédito quien aún mantiene el embargo trabado sobre sus fondos. • Que, en respuesta al Proveído N° 00212-5-2012, la Administración indicó que contra la quejosa se iniciaron diversos procedimientos coactivos signados con N° 06917-2010-1FN-R, 010829-2008-1FN-R, 6531-2009-1CH-R, 07327-2009-1-CH-R, 010079-2009-1FN-R, 018541-2009-1CH-R, 019520-2009-1FN-R, 019832-2007-1FN-R, 002594-2007-1FN-R Y 004064-2010-1CH-O, por la cobranza de los adeudos contenidos en las Resoluciones de Determinación N° 021071-2007, 01416-2007, 32350-2007, 17480-2008, 20189-2008, 40397-2008, 3406-2009, 05824-2008, 29738-2010, 5538-2011, 11037-2011, 24729-2011 y 4190-2010 y
--	--

	<p>la Orden de Pago N° 461-2010, giradas por Arbitrios Municipales de marzo a diciembre de 2006,2007,2008, octubre a diciembre de 2009, junio a diciembre de 2010 y enero a junio de 2011, así como por Impuesto Predial del año 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que indica que los Procedimientos Coactivos N° 010829-2008-1FN-R, 6531-2009-1CH-R, 07327-2009-1CH-R, 010079-2009-1FN-R, 018541-2009-1CH-R, 019520-2009-1FN-R, 019832-2007-1FN-R y 002594-2007-1FN-R, fueron acumulados en el Expediente Coactivo N° 019832-2007-1FN (ACUM) y los Procedimientos Coactivos N° 004064-2010-1CH-O y 06917-2010-1FN-R fueron acumulados en el Expediente N° 4064- 2010-1CH (ACUM). • Que refiere que en el Procedimiento Coactivo N° 019832-2007-1FN (ACUM), se procedió a trabar embargo en forma de retención, no obstante mediante Resolución N° Tres de 19 de enero de 2012, se procedió a la suspensión temporal de dicho procedimiento por haberse presentado demanda de revisión judicial y al levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención trabada a la cuenta de la quejosa en el Banco de Crédito del Perú por el monto de S/. 5 500,00. • Que en cuanto al Procedimiento Coactivo N° 4064-2010-1CH (ACUM) indica que mediante Resolución N° Dos se procedió a trabar embargo en forma de secuestro conservativo, el que resultó infructuoso, no obstante mediante Resolución N° Tres de 29 de diciembre de 2010, se procedió a la cancelación definitiva de
--	---

	<p>dicho procedimiento debido a que la totalidad del adeudo había sido cancelado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que obra a foja 49 copia del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial presentada por la quejosa ante el Poder Judicial el 18 de enero de 2012, contra los Procedimientos Coactivos N° 010829- 2008-1FN-R, 6531-2009-1CH-R, 07327-2009-1CH-R, 010079-2009-1FN-R, 018541-2009-1CH-R, 019520-2009-1FN-R, 019832-2007-1FN-R y 002594-2007-1FN-R 1 la misma que ha sido signada con Expediente N° 00263-2012-0-1801-SP-CA-03. • Que asimismo obra a foja 43, copia de la Resolución Coactiva N° Tres emitida con relación al Expediente Coactivo N° 19832-2007-1FN (ACUM) materia de queja, en la que la Administración en virtud a la referida demanda de revisión judicial ha dispuesto la suspensión del referido procedimiento de ejecución coactiva y el levantamiento de las medidas cautelares trabadas, de conformidad con lo normado en el artículo 23° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. • Que según se verifica del cargo de notificación obrante a foja 42, la mencionada Resolución Coactiva N° Tres fue debidamente notificado en el domicilio fiscal de la quejosa el 20 de enero de 2012, mediante constancia de negativa a recepción con sujeción a lo establecido en el artículo 21° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
ANÁLISIS DE	<ul style="list-style-type: none"> • Que según el numeral 38.1 del artículo 38° del Texto Único

FONDO	<p>Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, el obligado podrá presentar queja ante este Tribunal contra las actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar coactivos que lo afectan directamente e infringen el procedimiento de ejecución coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que el artículo 40 de la mencionada Ley, dispone que la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias de los gobiernos locales se regirá por lo dispuesto por el artículo 23° de la referida ley. • Que conforme al inciso a) del numeral 23.1 del artículo 23° de la citada norma, el obligado está facultado a interponer demanda ante la Corte Superior, con la finalidad que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, cuando iniciado el mismo se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia y otros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la citada Ley. • Que el numeral 23.3 de dicho artículo refiere que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el numeral 16.5 del artículo 16° de la ley antes citada. • Que el numeral 16.5 del artículo 16° de la misma ley precisa que
--------------	--

	<p>suspendido el procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que de acuerdo al numeral 21.3 del artículo 21° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1029, en el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalará la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, y si esta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado y se dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.• Que en tal sentido, toda vez que la quejosa optó por la vía de la revisión judicial a efecto que se emita pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente Coactivo N°19832-2007-1FN (ACUM), lo que incluye la notificación de las resoluciones coactivas efectuadas en dicho procedimiento, y, en consecuencia, al haber asumido competencia el Poder Judicial, no procede que este Tribunal tome conocimiento al respecto, criterio establecido en diversas resoluciones, tales como las N° 01413-5-2006, 01144-1-2008 y 01455-3-2010; por lo que corresponde inhibirse de la queja en este extremo.• Que en cuanto al Expediente Coactivo N° 4064-2010-1CH (ACUM), cabe indicar que dicho procedimiento ha sido dado por concluido por la Administración mediante Resolución de Ejecución Coactiva N° Tres de 29 de diciembre de 2010 (foja 26),
--	--

	<p>notificada a la recurrente el 29 de diciembre de 2012 (foja 115)'en mérito a que la propia recurrente efectuó la cancelación de los adeudos contenidos en dicho procedimiento, lo que ha ocurrido con anterioridad a la presentación de la queja (16 de enero de 2012) por lo que procede declararla infundada en este extremo.</p>
--	--

En el presente caso, la queja se plantea ante el inicio del procedimiento de ejecución coactiva que pretende el cobro de arbitrios municipales, a pesar de haber sido objeto de reclamo oportunamente.

Sobre el particular, podemos mencionar que el art. 25.1 del art. 25° del TUO de la Ley N° 26979 considera deuda exigible coactivamente aquella deuda bien emitida, notificada y no reclamada dentro del plazo legal; sin embargo, conforme lo advierte el administrado, el ejecutor coactivo inicia la cobranza coactiva.

Ante tal situación, corresponde la interposición de una Queja ante el Tribunal Fiscal, destinada a revisar los actos del Ejecutor o Auxiliar que afectan directamente al administrado o infrinjan el debido procedimiento.

A pesar de lo expuesto, el Tribunal Fiscal decide inhibirse del conocimiento de la queja presentada, toda vez que la quejosa ya había optado por la vía de la revisión judicial, a efecto que se emita pronunciamiento respecto de la legalidad del procedimiento

RTF N° 00048-Q-2017	
EXPEDIENTE	17653-2016
ASUNTO	Queja
FECHA	Lima, 4 de enero de 2017
SUMILLA	<p>Se inhibe del conocimiento de la queja contra un procedimiento de ejecución coactiva, pues la quejosa ha optado por la vía de la revisión judicial, en tal sentido, no procede que este Tribunal se avoque a la revisión de la legalidad del procedimiento coactivo, ya sea que se encuentre en trámite en dicho proceso o hubiera concluido. Se declara improcedente la queja en el extremo en que se solicita la devolución de un monto retenido e imputado a la deuda materia de cobranza, toda vez que no se ha establecido en vía de queja que la cobranza hubiera sido indebidamente iniciada; se da trámite de solicitud de devolución a tal extremo.</p>
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • Que el quejoso considera que el procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente N° 001725- 2013-ZTH-EC-SATT es indebido pues las resoluciones de determinación que sustentan la cobranza no han sido emitidas conforme a ley, siendo declaradas nulas mediante Resolución de Tribunal Fiscal N° 10820-7-2016. En ese sentido, que solicita la conclusión del referido procedimiento y la devolución de los importes indebidamente retenidos e imputados a la deuda materia de cobranza, en aplicación de lo dispuesto en las Resoluciones N°

	<p>10820-7-2016, 10499-3-2008 y 08879-4-2009.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que en respuesta al Proveído N° 1915-Q-2016, la Administración informó de fojas 196 a 199, que mediante Expediente Coactivo N° 001725-2013-ZTH-EC-SATT, siguió al quejoso el procedimiento de ejecución coactiva de la deuda contenida en las Resoluciones de Determinación N° 0207-0000000366- 2012 a 0207-0000000371-2012, giradas por el Impuesto de Alcabala y que mediante Resolución Número TRECE suspendió y dispuso el archivamiento de dicho procedimiento al haber quedado extinguida la deuda materia de cobranza producto de la ejecución del embargo en forma de retención.• Que agrega que mediante Resolución Número CUATRO de 24 de noviembre de 2014, emitida en el Expediente N° 0810-2013-0-1601-SP-CI-02, se declaró infundada la demanda de revisión judicial interpuesta contra el referido procedimiento de ejecución coactiva, la que fue declarada consentida mediante Resolución Número CINCO de 5 de enero de 2016.• Que de autos se tiene que mediante Expediente N° 00810-2013-0-1601-SP-CI-02, el quejoso interpuso demanda de revisión judicial respecto del procedimiento de ejecución coactiva seguido con Expediente N° 001725-2013-ZTH-EC-SATT, la que fue declarada infundada mediante Resolución Número CUATRO de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de fojas 182 a 192, al verificar que la deuda materia de cobranza era exigible coactivamente y que
--	---

	<p>el citado procedimiento coactivo se realizó en cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite.</p>
ANÁLISIS DE FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • Que según el numeral 38.1 del artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, el obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan lo establecido en el Capítulo III de la ley, referido a la ejecución coactiva de obligaciones tributarias con los gobiernos locales. • Que por su parte el artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 dispone que la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias de los gobiernos locales se regirá por lo dispuesto en el artículo 23° de la referida ley. • Que el inciso a) del numeral 23.1 del artículo 23° de la citada norma, prevé que el obligado está facultado a interponer demanda ante la Corte Superior, con la finalidad que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, cuando iniciado el mismo se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia y otros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la citada ley. • Que el numeral 23.5 del citado artículo prescribe que para efecto de resolver la demanda de revisión judicial, únicamente

	<p>corresponde a la Corte Superior revisar si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la ley.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que habiendo elegido el quejoso accionar por la vía del procedimiento de revisión judicial, no procede que este Tribunal se avoque a la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva respecto del cual se hubiere interpuesto demanda de revisión judicial, ya sea que se encuentre en trámite o hubiere concluido, por lo que corresponde inhibirse de la queja presentada en este extremo. Criterio similar establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 06201-4-2010, 04839-Q-2014 y 03617-Q-2016.• Que en cuanto a la devolución de los montos retenidos, debido a que mediante Resolución N° 10820-7- 2016, de fojas 20 y 21, este Tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones de Determinación N° 0207- 0000000366-2012 a 0207-0000000371-2012, cabe indicar que mediante Resolución N° 08879-4-2009 de 8 de setiembre de 2009, emitida con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, se ha dejado establecido que este Tribunal Fiscal ordenará la devolución del dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, debiendo la Administración en tal caso expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del
--	--

	<p>quejoso el monto indebidamente embargado así como los intereses aplicables.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que como se aprecia, conforme al citado criterio de observancia obligatoria, corresponde que este Tribunal, en la vía de la queja, ordene la devolución de importes embargados e imputados respecto de procedimientos coactivos con relación a los que ha emitido pronunciamiento en la misma vía, declarando fundada la queja, como consecuencia de haber verificado el inicio indebido del procedimiento de cobranza coactivo.• Que estando a lo expuesto y toda vez que el quejoso sustenta el pedido de devolución en lo resuelto por la Resolución de Tribunal Fiscal N° 10820-7-2016, y no en una resolución de este Tribunal en la que haya declarado fundada una queja respecto del Expediente Coactivo N° 001725-2013-ZTH-EC-SATT como consecuencia de verificar que tal procedimiento coactivo hubiera sido indebidamente iniciado, procede declarar improcedente la queja presentada en este extremo. Criterio similar ha sido expuesto por este Tribunal en las Resoluciones N° 07221-9-2013, 01440-Q-2013, 01563-Q-2015 y 02937-Q-2016.• Que no obstante lo expuesto, en aplicación del artículo 213° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, según el cual, el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter, procede dar trámite de solicitud no contenciosa de devolución al escrito formulado como
--	---

	queja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 162 del Código Tributario.
--	--

Por último, la presente queja se fundamente en que los valores de cobranza, que sirven de título para la ejecución coactiva se encuentran mal emitidos. Siendo así, solicita la conclusión del referido procedimiento y la devolución de los importes indebidamente retenidos e imputados a la deuda materia de cobranza.

De acuerdo a lo expuesto por el quejoso, se entiende que la deuda no sería exigible coactivamente, según el numeral 25.1 del art. 25° del TUO de Ley N° 26979.

Ante tal situación, corresponde la interposición de una Queja ante el Tribunal Fiscal, a fin de corroborar si la deuda puesta cobro se encuentra bien emitida, notificada y no reclamada oportunamente; sin embargo, conforme lo ha señalado este colegiado en sendas resoluciones, debe inhibirse del conocimiento de la queja contra un procedimiento de ejecución coactiva, cuando la quejosa ha optado por la vía de la revisión judicial, por lo tanto no procede que este Tribunal se avoque a la revisión de la legalidad del procedimiento coactivo, ya sea que se encuentre en trámite en dicho proceso o hubiera concluido.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia

Asimismo, para nuestra investigación fue fundamental la revisión de las sentencias de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual es competente para conocer los siguientes recursos: Casación, Apelación y Queja.

AUTO REV. JUD. N° 1568-2012	
FECHA	Lima, 11 de octubre del dos mil doce
MATERIA	Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
TEMA	Es materia de apelación la resolución número uno, de fecha 23 de enero del 2011, obrante a fojas 18, que declara improcedente la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva interpuesta por don Alberto Yarahuaman Quinto contra el Ejecutor Coactivo de la Dirección Regional de Cultura del Cusco.
SUMILLA	Confirmaron la resolución número uno, de fecha 23 de enero del 2012, obrante a fojas 18, que declaró Improcedente la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva; en los seguidos por Don Albert Yarahuaman Quinto contra el ejecutor Coactivo de la Dirección Regional de Cultura del Cusco sobre revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva.
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> Según se advierte a fojas trece, a través de su demanda don Alberto Yarahuaman Quinto pretende la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva en el expediente N° 007-2011, iniciado en su contra por la Ejecutora Coactiva del

	<p>Ministerio de Cultura – Dirección Regional de Cultura del Cusco, a efecto de que se declare la nulidad de la resolución número uno, con la cual se inició el procedimiento de ejecución coactiva, así como del acto de notificación de la resolución administrativa que sirve de título para la ejecución, debido a que esta ha sido notificada en una dirección distinta a aquella que fue expresamente declarada ante la Administración como su domicilio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco ha declarado improcedente la demandada, mediante la resolución número uno, de fecha veintitrés de enero de dos mil doce, obrante a fojas dieciocho, debido a que el actor no había acreditado la existencia de alguno de los supuestos de procedencia normados por el artículo 23, inciso 23.1 de la Ley N° 26979, esto es, la existencia de alguna medida cautelar trabada en su contra por la Ejecutora Coactiva o la conclusión del procedimiento de ejecución coactiva. • El demandante apela la decisión del A-quo argumentando que resulta errado para su caso exigir la acreditación de medidas cautelares trabadas en su contra, dado que de acuerdo a la Ley N° 26979, la Ejecutora Coactiva se encuentra en la posibilidad de ordenar la demolición de su construcción.
ANÁLISIS DE FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • Cabe indicar que el procedimiento de revisión judicial contemplado en el artículo 23 de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificado por la Ley N° 28165, no ha sido diseñado como un proceso de jurisdicción plena

	<p>para someter a evaluación la totalidad de la actuación de la Administración, sino más bien como un instrumento procesal excepcional de características específicas, destinado únicamente a tutelar el derecho al debido procedimiento de ejecución coactiva, a través de un proceso especial que solo puede activarse cuando haya concluido la actividad de ejecución de la Administración o cuando se acredite la existencia de un estado de urgencia directa e inmediata en el patrimonio del administrado que amerite la actuación inmediata del juzgador, a fin de evitar que la tutela jurisdiccional se convierta en infructuosa- En este sentido, el legislador ha establecido en el artículo 23.1 de la Ley N° 26979, modificado por la Ley N° 28165 que la revisión judicial de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva solo procede en dos supuestos: a) cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de credo de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la presente ley; y b) después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva dentro de un plazo de quince días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento. Bajo este contexto, la acreditación de alguno de los dos presupuestos antes indicados resulta necesaria para el inicio del proceso judicial, ya que de otro modo se incurriría en la</p>
--	---

	<p>desnaturalización del propósito para el cual fue ideado en nuestro sistema procesal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el presente caso, de la revisión de autos se desprende que el demandante no ha acreditado que dentro del procedimiento de ejecución coactiva tramitado en el Expediente N° 007-2011-Cusco se haya dictado alguna de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la Ley N° 26979 o que éste haya concluido; y siendo ello así, se desprende que en el presente caso, no se configura ninguno de los dos supuestos de hecho normados en la ley como presupuestos para habilitar la revisión judicial del procedimiento coactivo; por lo cual, corresponde confirmar lo decidido en primera instancia.
--	--

Al respecto de la presente sentencia, podemos señalar que el proceso de revisión judicial, previsto en el numeral 23.1 del artículo 23° del TUO de la Ley N° 26979, no ha sido diseñado como un proceso de jurisdicción plena para someter a evaluación la TOTALIDAD de la actuación de la administración tributaria, sino que es, un instrumento procesal EXCEPCIONAL de características específicas destinado únicamente a tutelar el derecho al debido procedimiento de los contribuyentes sometidos a un procedimiento de ejecución coactiva, el cual solo puede iniciarse cuando haya concluido la actividad de ejecución de la Administración Tributaria o cuando se acredite la existencia de un estado de urgencia directa e inmediata del patrimonio del obligado, a fin de evitar que la tutela jurisdiccional se convierta en infructuosa.

En este sentido, la Ley en comento, ha establecido que la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva solo procede en dos supuestos:

a) Cuando iniciado el procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° de la citada ley; y

b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento de ejecución coactiva.

En el presente caso, podemos advertir que el demandante NO HA ACREDITADO que dentro del procedimiento de ejecución coactiva tramitada se haya dictado alguna de las medidas cautelares previstas en el artículo 33° del TUO de la Ley N° 26979, o que éste haya concluido. Siendo ello así, no se configura ninguno de los dos supuestos de hecho normados en la ley para habilitar la revisión judicial del procedimiento coactivo.

SENTENCIA REV. JUD. N° 4710-2012	
FECHA	Lima, 07 de mayo 2013
MATERIA	Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
TEMA	Es materia de apelación la sentencia de fecha diez de noviembre del dos mil once, de fojas ciento catorce que declaró fundada la demanda; en

	consecuencia, NULO el Procedimiento de Ejecución Coactiva seguido respecto de la Resolución de Sanción N° S380118.
SUMILLA	El procedimiento de ejecución coactiva deviene en irregular ante deficiencias en la notificación de la resolución de sanción por ser ilegibles los datos consignados respecto de los testigos en el cargo de notificación de dicha resolución administrativa; testigos que han de dar certeza de tal acto administrativo, en estricto resguardo a los derechos fundamentales a un debido procedimiento administrativo y a una tutela jurisdiccional efectiva, conforme a lo establecido en el artículo 21 numeral 21.1) de la Ley N° 27444, y al numeral 4.3) del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26979, aprobado por Decreto Supremo N° 069-2003-EF.
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • El actor don Ricardo Pablo Huarcaya Huamani, a fojas trece, pretende que se revise la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva N° 22007400523160 iniciado en su contra. Como sustento de la demanda interpuesta, precisa el actor que por Resolución N° 220-041- 00511562 se dictó la orden de pago, sin que se le haya notificado con arreglo a ley, es decir, se notificó en una dirección diferente, privándosele de su derecho de defensa, ya que no pudo interponerse el recurso impugnatorio que corresponde para efectos de revisar dicha resolución. • Por sentencia de primera instancia de fecha diez de noviembre del dos mil once, de fojas ciento catorce se ha declarado FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULO el procedimiento de ejecución coactiva iniciado en contra del actor por la Resolución de Sanción N° S380118; precisando la Sala de mérito que respecto

	<p>de la resolución de sanción se dejó constancia de la negativa de recepción e identificación de la persona con quien se entendió la notificación, siendo que el notificador a fin de acreditar tal situación consignó la firma de dos testigos; sin embargo, no consta legibles la firma de uno de los dos testigos allí consignados; por lo tanto el procedimiento de ejecución coactiva deviene en irregular.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por recursos de apelación el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fojas ciento veintinueve y ciento treinta y cinco, respectivamente; sostienen en esencia que el procedimiento de ejecución coactiva cuestionado se ha llevado en estricta observancia de las normas contenidas en la Ley N° 26979 y sus modificatorias, por lo que, lo argumentado en la demanda no se ajusta a los parámetros legales establecidos. Además precisa que respecto del actor no existe a la fecha registro de deuda por concepto de las resoluciones cuestionadas, toda vez que por Ordenanza N° 1534 se dejó sin efecto las resoluciones de sanción donde no se haya consignado los datos del conductor, por lo que, esta causa debe de concluir por sustracción de la materia.
<p>ANÁLISIS DE FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De conformidad con el artículo 23, numeral 23.5) de la Ley N° 26979, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28165, el proceso de revisión judicial tiene por finalidad examinar únicamente si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la citada Ley. En efecto, mediante la presente acción, el Colegiado debe pronunciarse sobre

	<p>la legalidad del procedimiento coactivo y establecer si éste se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, plazos y trámites que lo rigen, como son la ley acotada y su Reglamento, así como las normas particulares que cada institución pública prevé para dicho procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito, establece las infracciones sobre dicha materia, y los tipos de sanciones a aplicarse; asimismo, establece que corresponde a la Policía Nacional del Perú, asignada al control de tránsito, imponer las papeletas de infracción por la comisión de infracciones; en consecuencia, en tanto se cumpla con lo dispuesto en el Decreto Supremo citado, debe entenderse que la Resolución de Sanción por infracción vehicular constituye un acto administrativo, que de acuerdo con el numeral 9.1) del artículo 9 de la Ley N° 26979, resulta exigible coactivamente. • Para mayor precisión, el artículo 9, inciso 9.1), de la Ley N° 26979, considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley, o en el que hubiere recaído resolución firme, confirmando la obligación. • En cuanto a la eficacia de las notificaciones, cabe precisar que esta Sala Suprema ha reiterado en numerosa jurisprudencia que conforme al artículo 21 numeral 21.1) de la Ley N° 27444, Ley del
--	---

	<p>Procedimiento Administrativo General, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. En ese sentido, el numeral 21.3) del artículo 21 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029, señala: "En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Además la norma citada en el considerando precedente, debe ser concordada con el segundo y tercer párrafos del numeral 4.3) del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26979, aprobado por Decreto Supremo N° 069-2003-EF que establece: "Si la resolución administrativa que genera la obligación materia de ejecución forzosa hubiese sido notificada según el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), para efectos de la ejecución coactiva se acompañará copia del acta a que se refiere dicha norma. Dicha acta deberá contener la firma de dos testigos en caso que la persona con quien se entendió la notificación de la resolución administrativa, se hubiese
--	--

	<p>negado a identificarse o firmar”.</p> <ul style="list-style-type: none">• En tanto que, el inciso 14.1) del artículo 14 de la Ley N° 26979, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28165, señala que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible.• Dentro del marco normativo precedente, esta Sala Suprema advierte que efectivamente en el cargo de notificación de la resolución de sanción se dejó constancia de la negativa de recepción e identificación de la persona con quien se entendió la notificación, siendo que el notificador a fin de acreditar tal situación consignó la firma de dos testigos; sin embargo, resulta ilegible los nombres de uno de los testigos allí consignados; tampoco obra la resolución de imputación de responsabilidad solidaria, menos el cargo de su notificación, lo que denota la irregularidad de dicho procedimiento, pues no se ha tramitado conforme a la Ley N° 26979 y su Reglamento. En consecuencia, teniendo en cuenta que la ejecutabilidad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad y deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido establece a partir de su notificación, se arriba a la conclusión de que al no haberse notificado debidamente al actor con las resoluciones administrativas en cuestión deviene en nulo el procedimiento de ejecución coactiva originado, por haberse vulnerado las normas contenidas en la Ley N° 26979 y su
--	---

	Reglamento, y transgredido los derechos fundamental a un debido procedimiento administrativo y tutela jurisdiccional efectiva del demandante.
--	---

De acuerdo a la sentencia, podemos advertir que ante el supuesto de no haberse notificado correctamente la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva, de acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley 28165, que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, supone la ineficacia de los actos de ejecución.

Cabe recordar que el numeral 9.1 del art. 9° del TUO de la Ley 26979, establece que se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento.

Por tanto, el procedimiento resulta irregular ante deficiencias en la notificación de la resolución de sanción por ser ilegibles los datos consignados respecto de los testigos en el cargo de notificación de dicha resolución administrativa; testigos que han de dar certeza de tal acto administrativo, en estricto resguardo a los derechos fundamentales a un debido procedimiento administrativo y a una tutela jurisdiccional efectiva, conforme a lo establecido en el artículo 21 numeral 21.1) de la Ley N° 27444, y al numeral 4.3) del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26979, aprobado por Decreto Supremo N° 069-2003-EF.

SENTENCIA REV. JUD. N° 1605-2012 CALLAO	
FECHA	Lima, 23 de Octubre del 2012
MATERIA	Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
TEMA	Es materia de grado la sentencia de fojas doscientos setenta y cuatro de fecha veintisiete de julio del dos mil once, que declara infundada la demanda de fojas veintitres, interpuesta por la Universidad Nacional Agraria La Molina contra la Municipalidad Provincial de Callao sobre revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva, signado con el N° 42260-2008.
SUMILLA	Confirmaron la sentencia apelada de fojas doscientos setenta y cuatro, su fecha veintisiete de julio del dos mil once, que declara Infundada la demanda; en los seguidos por la Universidad Nacional Agraria La molina contra la Municipalidad Provincial del Callao sobre revisión judicial de procedimiento coactivo.
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> Mediante escrito de fojas 23, la mencionada Universidad, interpuso demanda a efecto que se declare nulo el procedimiento de ejecución coactiva en comento, a través del cual se viene tramitando la cobranza coactiva de las Resoluciones de Determinación emitidas por la Municipalidad Provincial del callao por los conceptos de arbitrios de limpieza pública y seguridad ciudadana del ejercicio fiscal del año 2008, en relación al inmueble

	<p>ubicado en la calle Bahía de Paracas S/N, de la Manzana E de la Urbanización Industrial Santo Domingo de propiedad de la actora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que, sustenta su demanda en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, que es el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, que contempla a la falta de notificación al administrado, alegando que su solicitud formulada en tal sentido ante el ejecutor coactivo, ha sido declarada improcedente; no obstante existen ciertas dudas respecto a su realización, ya que no se trataba de una notificación clara, correcta ni legal.
<p>ANÁLISIS DE FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al respecto es menester advertir que conforme a los literales a) y d) del numeral 25.1 del artículo 25° de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, se considera deuda exigible, la establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, debidamente notificadas; que en el presente caso constituyen títulos de ejecución las Resoluciones de Determinación Nos 01769-2008-MPC-GGATR-GR, 01770-2008-MPC-GGATR-GR, 01771-2008-MPC-GGATR Y 01772-2008-MPC-GFATR-GR, que en copia de fojas uno a cuatro del expediente administrativo que se tiene a la vista, las mismas que se encuentran fehacientemente notificadas a la Universidad demandante, cuyo empleado luego de sellar el documento en señal de conformidad, le atribuyó a dicho documento el número de registro 4997. • De otro, el artículo 104° del texto Único Ordenado del Código

	<p>Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, establece que la notificación efectuada con certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, recibéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado; en el presente caso, además de lo expuesto en el considerando anterior; a ello, corroborándose acerca de la veracidad de dicha notificación, con el cargo de fojas doce, en el que tal oportunidad si se selló el documento, suscribiéndolo la persona encargada de la mesa de partes de la misma universidad demandante, quien por dicho motivo no puede alegar falta de notificación a su parte ni con el título de ejecución ni mucho menos con las resoluciones emitidas al interior del procedimiento de ejecución coactiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que, el artículo 9 de la Ley N° 26979, en su numeral 9.1, dispone que se considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído firme confirmando la obligación. Del mismo modo, el artículo 14 en su numeral 14.1 de la Ley N°
--	--

	<p>26979, modificada por la Ley N° 28165, prescribe que el procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que en consecuencia, habiéndose observado la formalidad de la notificación prevista en el artículo 21 numeral 21.3 de la Ley N° 27444, así como los artículos 9 numeral 9.1, y 14 numeral 14.1 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, corresponde confirmar la apelada.
--	--

Conforme se ha señalado en líneas anteriores, queda claro que la notificación es una de las diligencias más importantes para la Administración Tributaria; toda vez, que marca la pauta para el inicio de los procedimientos tributarios tramitados según su facultad.

Ahora bien, señalamos también que la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 104° del Código Tributario acarrea la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva. Por tanto, bien puede ser sometido, como dijimos a un recurso de Queja, según el art. 38° del TUO de la Ley N° 26979 que faculta al administrado a interponerlo ante el Tribunal Fiscal en contra las actuaciones del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan el debido procedimiento.

Sin embargo, en el presente caso, el administrado presentó la demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, atendiendo a lo señalado por el numeral 23.3 del art. 23 del TUO de la Ley N° 26979 pues la sola presentación de la demanda bastará para suspender el procedimiento.

SENTENCIA REV JUD. N°: 5047-2011	
FECHA	Lima, veintiocho de agosto de dos mil doce
MATERIA	Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
TEMA	Es materia de apelación: 1) La resolución número uno, de fecha seis de febrero del dos mil nueve, de fojas veintiuno; en el extremo que ordena la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, y consecuentemente el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en contra del administrado; 2) la sentencia de fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, de fojas noventa y tres que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por don Justo Velásquez Gibaja.
SUMILLA	Confirmaron la resolución número uno, de fecha seis de febrero del dos mil nueve, de fojas veintiuno; en el extremo que ordena la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, y consecuentemente el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en contra del administrado; y Revocaron la sentencia en el extremo que se declaró fundada la demanda y Nulo el procedimiento de ejecución coactiva N° 22007400404057; y Reformándola declararon infundado dicho extremo, y la Confirmaron en lo demás que contiene; en los seguidos por don Justo Velásquez Gibaja contra el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros, sobre Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> Respecto de la apelación interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de

	<p>Lima, a fojas cuarenta y nueve, contra la resolución número uno, de fecha seis de febrero del dos mil nueve, de fojas veintiuno; dicho pronunciamiento debe ser confirmado por haber sido emitido conforme a lo dispuesto por el artículo 23, numeral 23.3, de la Ley 26979, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28165, concordante con el artículo 16, numeral 16.5 de la Ley N° 26979, modificado por el artículo 1 la Ley 28165, pues de acuerdo a la primera de las normas citadas, la sola presentación de la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, sin que varíe tal criterio normativo lo establecido en los numerales 23.4 y 23.5 del artículo 23, de la Ley N° 26979, modificado por 1 de la Ley N° 28165.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El actor pretende mediante el presente proceso, a fojas dieciocho que se revise la legalidad de los procedimientos de ejecución coactiva iniciados en su contra con respecto a las Resoluciones de Medida Cautelar: N° 22004400144533, N° 22004400144534, N° 22004400150097, N° 22004400150098, N° 22004400151003, N°22004400151004 y N° 22004400157596, iniciados en su contra por las multas impuestas a su vehículo de placa de rodaje número ROL - 639. • Como sustento de la demanda interpuesta, precisa el actor que no fue notificado Con las resoluciones de ejecución Coactiva, tampoco con las Resoluciones de Sanción, ni las de imputación de responsabilidad solidaria.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Por sentencia de primera instancia del diecinueve de mayo del dos mil diez, de fojas noventa y tres se declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia NULOS los procedimientos de ejecución Coactivas N° 22007400389901, N° 22007400404057, N° 22007400379299 y N° 22007400379298; e INFUNDADA respecto a los procedimientos de ejecución coactivas N° 22007400404058 22007400397147 y N° 22007400410093, sosteniendo la Sala Superior respecto a los primeros que devenían en irregulares, por cuanto no se han respetado las formalidades que exige la normatividad vigente; y respecto a los segundos que habían sido bien notificados los actos administrativos cuestionados. • Por recursos de apelación, de fojas ciento ocho y ciento trece, interpuestas por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad metropolitana de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima; sostienen ambos en esencia que los procedimientos de ejecución coactivas cuestionados se han llevado en estricta observancia de las normas contenidas en la Ley N° 26979 y sus modificatorias, por lo que, lo argumentado en la demanda no se ajusta a los parámetros legales establecidos.
ANÁLISIS DE FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • De conformidad con el artículo 23, numeral 23.5 de la Ley N° 26979, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28165, el proceso de revisión judicial tiene por finalidad examinar únicamente si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la citada Ley. En efecto,

	<p>mediante la presente acción, el Colegiado debe pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento coactivo y establecer si éste se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, plazos y trámites que lo rigen, como son la ley acotada y su reglamento, así como las normas particulares que cada institución pública prevé para dicho procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito, establece las infracciones sobre dicha materia, y los tipos de sanciones a aplicarse; asimismo, establece que corresponde a la Policía Nacional del Perú, asignada al control de tránsito, imponer las papeletas de infracción por la comisión de infracciones; en consecuencia, en tanto se cumpla con lo dispuesto en el Decreto Supremo citado, debe entenderse que la Resolución de Sanción por infracción vehicular constituye un acto administrativo, que de acuerdo con el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 26979, resulta exigible coactivamente.• Para mayor precisión, el artículo 9, inciso 9.1, de la Ley N° 26979, considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley, o en el que hubiere recaído resolución firme, confirmando la obligación.• En cuanto a la eficacia de las notificaciones, cabe precisar que esta Sala Suprema ha reiterado en numerosa jurisprudencia que
--	---

	<p>conforme al artículo 21 numeral 21.1 de la Ley N° 27444, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. En ese sentido, el numeral 21.3, modificado el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029, señala: “En el acto notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Además la norma citada en el considerando que precede, debe ser concordada con el segundo y tercer párrafos del numeral 4.3 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26979, aprobado por Decreto Supremo N° 069-2003-EF que establece: “Si la resolución administrativa que genera la obligación materia de ejecución forzosa hubiese sido notificada según el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), para efectos de la ejecución coactiva se acompañará copia del acta a que se refiere dicha norma. Dicha acta deberá contener la firma de dos testigos en caso que la persona con quien se entendió la notificación de la resolución administrativa, se hubiese negarlo a identificarse o firmar”. • En tanto que, el inciso 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 26979,
--	---

	<p>modificado por el artículo 1 de la Ley NO 28165, señala que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dentro del marco normativo precedente, esta Sala Suprema advierte con relación a los procedimientos de ejecución coactivas N° 22007400389901, N° 22007400379299, N° 22007400379298, que devienen en irregulares, por cuanto no se han respetado las formalidades contenidas en la Ley N° 26979; y respecto a los procedimientos de ejecución coactivas N° 22007400404058, N°22007400397147, N° 22007400404057, y N° 22007400410093, que la Administración ha cumplido con notificar debidamente al actor.• En consecuencia, teniendo en cuenta que la ejecutabilidad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad y deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido establece a partir de su notificación, se arriba a la conclusión de que al no haberse notificado debidamente al actor en los procedimientos de ejecución coactivas N° 2007400389901, N° 22007400379299 y N° 2007400379298, los mismos devienen en irregulares y nulos, por haberse vulnerado las normas contenidas en la Ley N° 26979 y su Reglamento, y transgredido el derecho fundamental a un debido procedimiento del demandante.
--	--

Según la sentencia, por resolución que admite a trámite la demanda de revisión judicial de fecha 06 de febrero del 2009, se dispuso también la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, y en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares en contra del administrado.

El numeral 23.3 del artículo 23° de la ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, concordante con el numeral 16.5 del artículo 16° de la acotada ley, dispone que la sola presentación de la demanda suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva sin que varíe tal criterio normativo lo establecido en los numerales 23.4 y 23.5 del artículo 23° de la referida ley, que regulan un supuesto distinto.

SENTENCIA REV JUD. N°: 843 - 2012	
FECHA	Lima, veintitrés de octubre del dos mil doce
MATERIA	Revisión Judicial del Procedimiento de Ejecución Coactiva
TEMA	Vienen en grado de apelación los autos de fechas veintitrés de junio y dos de agosto de dos mil once, de fojas doscientos siete y doscientos treinta y seis, que requiere al demandante presente póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata y que autoriza al ejecutor coactivo demandado el levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, paralizada a mérito de la interposición de la demanda; y, la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil once, obrante a folios doscientos cuarenta y cinco, que declara infundada la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva.
SUMILLA	Confirmaron los autos de fechas veintitrés de junio y dos de agosto del

	<p>dos mil once, de fojas doscientos siete y doscientos treinta y seis, respectivamente, que requiere al demandante presente póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata y que autoriza al ejecutor coactivo demandado el levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, paralizada a mérito de la interposición de la demanda; y, la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil once, obrante a folios doscientos cuarenta y cinco, que declara infundada la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva, interpuesta por don Lino Puma Villegas; en los seguidos contra el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Arequipa y otro;</p>
HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • En cuanto al primer auto apelado (resolución numero veintidós del veintitrés de junio del dos mil once) por don Lino Puma Villegas, en su recurso de fojas doscientos veintitrés, señala que el pedido de que presente póliza de caución o carta fianza ha sido a mérito de un escrito dirigido para otro proceso, no siendo voluntad de la parte demandada, según se aprecia del escrito de fecha quince de junio de dos mil once, lo cual vulnera el principio de congruencia y afecta el debido proceso y la motivación de las resoluciones. • El auto de fojas doscientos siete, que en mérito a lo previsto en el artículo 23 numeral 23.4 de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva requiere a la parte demandante presentar póliza de caución, carta fianza o efectúe la consignación del monto exigido, bajo apercibimiento de autorizar ejecutor coactivo demandado, levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, paralizada a mérito de la

interposición de la presente demanda, no se ha generado a consecuencia del escrito de fecha quince de junio del dos mil once, que -como anexo del recurso de apelación del actor— corre a fojas doscientos dieciocho, sino a consecuencia del escrito de fecha seis de junio de dos mil once, interpuesto por la Municipalidad Provincial de Arequipa y que corre a fojas ciento noventa y cuatro; por lo que debe desestimarse los agravios del apelante, al no apreciarse además la vulneración del principio de congruencia, al debido proceso ni a la motivación de resoluciones.

- Sobre el segundo auto apelado, el actor en su recurso de fojas doscientos cincuenta y siete, al igual que en el caso anterior, señala que el pedido de que presente póliza de caución o carta fianza ha sido a mérito de un escrito dirigido para otro proceso, no siendo voluntad de la parte demandada, según se aprecia del escrito de fecha quince de junio de dos mil once, lo cual vulnera el principio de congruencia y afecta el debido proceso y a la motivación de resoluciones.
- El auto de fojas doscientos treinta y seis, que resuelve autorizar al ejecutor coactivo, el levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, paralizada a mérito de la interposición de la demanda, no es más que la resolución judicial dictada a consecuencia del mandato judicial incumplido y del apercibimiento decretado, no siendo cierto que se haya generado a consecuencia de un escrito correspondiente a otro proceso, sino como ya se ha explicitado, tiene origen en el escrito presentado por

	<p>la parte demandada, que corre a fojas ciento noventa y cuatro; por ende, los autos apelados deben ser confirmados, desestimándose los agravios expuestos en los recursos de apelación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sobre la sentencia, en su recurso de fojas doscientos sesenta y cuatro, el impugnante señala que la Sala incurre en error al sostener que en el proceso contencioso administrativo tramitado ante el Primer Juzgado Civil (Expediente N° 03364-2009) se está ventilando el cuarto presupuesto del artículo 13 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, respecto de la medida cautelar previa, cuando en dicho proceso se discute es adulteración del Acta de Inspección que dio origen a la resolución de clausura del local comercial del actor; añade que en tanto la medida cautelar previa ordenada por la demandada no reúne los cuatro requisitos que establece la mencionada norma, la ejecución de la misma constituye un abuso del derecho del ejecutor coactivo, contrario al ordenamiento jurídico.
<p>ANÁLISIS DE FONDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, señala en su artículo 23 numeral 23.5 — modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28165, que únicamente procede la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva para determinar si ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones de la citada ley. En consecuencia, no corresponde judicialmente la revisión del objeto materia del procedimiento de ejecución coactiva, sino solamente que su tramitación sea conforme a ley. • Según se aprecia de la demanda de fojas diez, el accionante recurre

	<p>al órgano jurisdiccional a fin de que se revise judicialmente la legalidad de la medida cautelar previa ordenada mediante Resolución Gerencial N° 38899-08-MPA/GAT y materializada mediante la Resolución de Medida Cautelar Previa de Clausura de Establecimiento N° 01-2009- MPA/SGEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En efecto, como se ha concluido en la apelada, la demanda es infundada, porque la medida cautelar previa impuesta por el ejecutor coactivo, se ha emitido conforme a las facultades de la autoridad municipal y de lo previsto en el artículo 13, numeral 13.7 de la Ley N° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificado por la Ley N° 28165 .En dicho contexto el argumento del apelante en el sentido que la Resolución Gerencial N° 38899-08-MPA/GAT, generadora de la obligación, no se encuentra fundamentada, dicho extremo no corresponde resolverse en este proceso de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva, sino a través del proceso contencioso administrativo; de modo que, el impugnante no puede sostener tampoco que la apelada contiene motivación aparente o incongruente, sino - contrario a lo alegado- la sentencia contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan en sentido de su decisión.
--	--

Al respecto de esta sentencia, resulta interesante señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 23.4 del art. 23° del TUO de la Ley 2979, la revisión judicial no solamente exige la suspensión del procedimiento de ejecución coactivo y el levantamiento de las medidas cautelares; sino que además, se requiere por parte del demandante presentar

póliza de caución, carta fianza o efectuar la consignación del monto exigido, bajo apercibimiento de autorizar al ejecutor coactivo demandado el levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva que fue suspendido en mérito de la interposición de la presente demanda.

4.2.2. Entrevistas

En este punto, presentaremos los resultados de las entrevistas efectuadas a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Para la elección de nuestros entrevistados, tomamos en cuenta la función que cumplen dentro de la institución en torno al problema planteado, la suspensión del procedimiento coactivo y el levantamiento de las medidas cautelares, a cargo del Ejecutor Coactivo y el Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Asimismo, atendiendo a su rol como defensor de los intereses de la entidad frente a la demanda de Revisión Judicial ante la Corte Superior de Justicia, consideramos también al Procurador Público de esta Municipalidad.

Las entrevistas al formularse fueron aplicadas en mérito a un cuestionario previamente desarrollado, en el cual se han involucrado puntos claves para la comprensión de nuestro tema.

TABLA N° 01:
EXPERIENCIA EN EL CARGO QUE OCUPA, EN AÑOS

ITEM FUNCIONARIO	DENTRO DE LA ENTIDAD	FUERA DE LA ENTIDAD
AUXILIAR COACTIVO	18	--
EJECUTOR COACTIVO	2	3
PROCURADOR PÚBLICO	1	2
SUB TOTAL		

Fuente: Entrevista a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, año 2017
Elaboración Propia

Empezaremos describiendo a nuestros funcionarios según la experiencia en el cargo, ya sea dentro o fuera de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. De esta manera, apreciamos que el auxiliar coactivo entrevistado lleva 18 años como auxiliar coactivo de la institución; por su parte, el ejecutor coactivo cuenta con 2 años dentro de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y tiene 3 años más cumpliendo funciones similares fuera de esta entidad; y por último, tenemos al Procurador Público que lleva 1 año en el cargo dentro de la Municipalidad y tiene 2 años más en otras instituciones.

TABLA N° 02:
**OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE REVISIÓN
JUDICIAL EN EL EL PROCEDIMIENTO COACTIVO**

OPINIÓN FUNCIONARIO	ES UNA EVASIÓN	ES UNA ELUSIÓN	TOTAL
AUXILIAR COACTIVO	1		
EJECUTOR COACTIVO		1	
PROCURADOR PÚBLICO		1	
SUB TOTAL	1	2	3

Fuente: Entrevista a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, año 2017
Elaboración Propia

Conforme a la opinión de nuestros entrevistados, la mayoría concluye que la causal de suspensión por la presentación una demanda de revisión judicial resulta siendo una práctica elusiva, más que evasora.

Iniciaremos por describir la respuesta del **Ejecutor Coactivo**, quien hace un breve recorrido al cuestionamiento de la causal de suspensión ante la presentación la demanda de revisión judicial, señalando que:

“...entiendo que la revisión judicial descrita en el numeral 23.3 del art. 23 del TUO la Ley N° 26979 tenga la buena intención de revisar el procedimiento de ejecución coactiva, atendiendo al debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales de la persona; sin embargo, el día de hoy es tomado por los administrados como una solución legal, para escapar de sus obligaciones como contribuyentes, tengan o no tengan razón acerca de la legitimidad del pago, es por tanto una norma elusiva...”

Asimismo, el **Procurador Público** hace algunas precisiones en cuanto a la presentación de la demanda de revisión judicial, pues afirma que:

“...las demandas de revisión judicial contra los actos administrativos, tienen la finalidad de respetar el debido proceso a cargo de la autoridad administrativa; caso especial, será la revisión judicial del procedimiento coactivo, puesto que los demandantes

invocan el artículo incoado en dicha Ley, a fin de paralizar la cobranza, muchas veces, para darles tiempo de reacción, ya que muchos de ellos tiene medida cautelar trabada, supongo que lo hacen para dilatar el tiempo, ya que siempre estas demandas son infundadas...”

Por el contrario, el **Auxiliar Coactivo** expuso elementos más subjetivos sobre la presentación de la demanda de revisión judicial, pues manifiesta que:

“...las revisiones judiciales son presentadas por ciertos contribuyentes, pero este número, es el que no tiene animus de pagar, y lo hacen solamente para evadir el pago de sus tributos, o lo que es lo mismo, incumplir con sus obligaciones como ciudadano...”

TABLA N° 03:
OPINIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
ANTE LA REVISIÓN JUDICIAL

OPINIÓN FUNCIONARIO	A FAVOR	EN CONTRA	TOTAL
AUXILIAR COACTIVO		1	
EJECUTOR COACTIVO		1	
PROCURADOR PÚBLICO		1	
SUB TOTAL		3	3

Fuente: Entrevista a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, año 2017
Elaboración Propia

Del cuadro apreciamos que la opinión de los funcionarios es categórica, no están de acuerdo que las medidas cautelares se levanten, luego de haberse planteado la demanda de Revisión Judicial.

Sobre el particular el **Ejecutor Coactivo**, opinó lo siguiente:

“...Apoyamos la idea, que la intención sea cuidar que se respete los derechos del obligado, de todas maneras tendríamos que suspender el procedimiento coactivo, pero de ninguna manera debiéramos levantar las medidas trabadas en favor de la Municipalidad, ello es un exceso legal...”

El primer **Auxiliar Coactivo** enfatiza esta problemática respecto al caso de todas las Administraciones Tributarias, señalando que

“...mientras se resuelve la demanda en el Poder Judicial, solo debería suspenderse la cobranza y no levantarse el embargo. Existe un exceso de la normativa al disponer el levantamiento de las medidas cautelares, pues la mayoría de casos son declarados infundados, y luego, al tratar de proseguir con la cobranza, ya no existen bienes para embargar...”

Luego, el **Procurador Público** a manera de comentario, sostiene:

“...supongo que el problema de la dilación en la cobranza, termina agravándose aún más, cuando el ejecutor coactivo tiene

que obligatoriamente levantar las medidas cautelares dictadas por éste, lo cual, no asegura en nada el pago posterior a la institución...”

TABLA N° 04:
OPINIÓN RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

OPINIÓN FUNCIONARIO	A FAVOR	EN CONTRA	TOTAL
AUXILIAR COACTIVO		1	
EJECUTOR COACTIVO	1		
PROCURADOR PÚBLICO	1		
SUB TOTAL	2	1	3

Fuente: Entrevista a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, año 2017
Elaboración Propia

Observamos que la opinión de nuestros entrevistados difiere, pues el ejecutor y el auxiliar coactivo, están de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia, respecto a la demanda de revisión judicial.

“...si la Corte Superior de Justicia conmina a la entidad a la exhibición del expediente coactivo por la demanda de revisión judicial presentada, lo hará en mérito a la tutela jurisdiccional que asiste al demandante, ello no lo podemos cuestionar; en tal caso, la Sala no se hace problema, pues aplica literalmente lo dicta la norma en comento, entonces declarará fundada o infundada la demanda según el caso...” opinó el **Ejecutor Coactivo**.

También citamos la opinión del **Auxiliar Coactivo**, que señala:

“...según la Sala Superior, siempre falla declarando infundada la demanda presentada por los administrados, en el caso de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el 100% de los casos resuelve a favor de la entidad...”

Sin embargo, el **Procurador Público** muy por el contrario opina:

“...bastaría que la Sala Superior revisara los supuestos de la Ley N° 26979 para la presentación de la demanda de revisión judicial contra el procedimiento coactivo y se dará cuenta, que los recurrentes presentan las demandas, sin observar el requisito indispensable acerca de la existencia de una medida cautelar trabada, con ello rechazarían de inmediato el escrito...”

TABLA N° 05:
OPINIÓN RESPECTO A MODERNIZAR LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN COACTIVA

OPINIÓN FUNCIONARIO	A FAVOR	EN CONTRA	TOTAL
AUXILIAR COACTIVO	1		
EJECUTOR COACTIVO	1		
PROCURADOR PÚBLICO	1		
SUB TOTAL	3	0	3

Fuente: Entrevista a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, año 2017

Elaboración Propia

Respecto a la opinión de modernizar la Ley de Procedimiento Coactivo, todos nuestros funcionarios expresaron la necesidad urgente que impera para la modernización de esta norma.

Así, tenemos el comentario del **Ejecutor Coactivo** en referencia al contexto legislativo en cobranza coactiva, pues opinó que:

“...Es necesaria una revisión completa de la Ley N° 26979 para justarla al marco legal vigente sobre derecho público; entiendo que la idea es modernizarla y adecuarla a nuestra realidad; sino, tal cual está, seguirá siendo incongruente con los principios de autotutela e interés público...”

El **Auxiliar Coactivo** puntualiza los aspectos en que la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva debe modificarse:

“...La Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva debe modificarse en ciertos aspectos, el principal respecto al no levantamiento de la medida cautelar ante la mera presentación de la demanda de revisión judicial, por otro lado, acerca de la ejecución de la medida cautelar de demolición, la cual debe ser efectuada por parte del propio órgano instructor...”

A manera de conclusión el **Procurador Público** opina que:

“...en efecto, urge una reforma de la Ley de Procedimiento Coactivo, y no es la única, sino hay varias leyes administrativas que necesitan ser modificadas para ser entendidas por los magistrados, ya que muchas veces, el problema de los malos fallos radica en la incomprensión de los jueces por las normas de carácter administrativo...” aseveró.

CAPÍTULO 5. Conclusiones

5.1. Conclusiones

- ✓ El procedimiento de ejecución coactiva regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es por esencia un procedimiento de naturaleza administrativa; pues tiene por objeto, que la propia Administración Tributaria satisfaga sus pretensiones legítimas frente a sus deudores, sin necesidad de recurrir a una instancia u órgano distinto; sin embargo, a tenor del numeral 23.3 del art. 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se advierte que el deudor tributario puede obtener la inmediata suspensión del procedimiento, si es que interpone una demanda de revisión judicial ante el Poder Judicial, puesto que, el artículo no se exige un pronunciamiento judicial, ni tampoco el dictado de una medida cautelar dentro o fuera del proceso; en verdad, ni siquiera se exige que la demanda interpuesta se encuentre admitida a trámite.

- ✓ Si bien es cierto, el procedimiento de ejecución coactiva nace como una potestad que tiene la Administración Tributaria para hacer cumplir sus propios actos; también lo es, que la suspensión por cualquier argucia legal, como la sola constancia de recepción de la demanda de revisión judicial presentada al ejecutor, evidencian una grave afectación a la facultad de autotutela que caracteriza a la administración pública.

- ✓ Bajo el supuesto del numeral 23.3 del art. 23° del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la Administraciones Tributaria se encuentran en estado de indefensión frente a la intención del deudor, de dilatar la exigibilidad de la deuda impaga, pues la paralización de los actos de coerción hasta el pronunciamiento de la Corte Superior, supone la afectación de su función primordial, la de garantizar la deuda impaga; máxime, si tras el reinicio del procedimiento coactivo por un fallo a favor, las medidas cautelares que en adelante se traben, posiblemente resulten infructuosas ante la supuesta insolvencia del deudor tributario.

5.1. Recomendaciones

- ✓ Existen otros medios para la revisión de los actos realizados por el ejecutor y auxiliar coactivo a fin de garantizar el debido procedimiento, sin desnaturalizar la cobranza coactiva, como es el recurso de queja regulado por el art. 38° del TUO de la Ley N° 26979. La misma que es resuelta por el Tribunal Fiscal, máximo órgano administrativo en materia tributaria, dentro del plazo máximo de 20 días hábiles.

- ✓ Ahora bien, respecto a la investigación efectuada, proponemos la siguiente modificación al numeral 23.3 del art. 23° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, a fin de que sea considerada como una verdadera causal de suspensión sin desnaturalizar al procedimiento de ejecución coactiva:

TEXTO ACTUAL:

LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

Artículo 23°.- Revisión judicial del procedimiento.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16°, numeral 16.5 de la presente Ley.

PROPUESTA:

LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

Artículo 23°.- Revisión judicial del procedimiento.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, resultando inaplicable lo previsto en el artículo 16°, numeral 16.5 de la presente Ley.

CAPÍTULO 6. BIBLIOGRAFIA

- AGUILAR ESPINOZA, Henry (2015). INFORME TRIBUTARIO: ¿Qué deudas son exigible en cobranza coactiva por parte de la SUNAT?. Editorial Asesor Empresarial. Lima-Perú.
- BRAVO CUCCI, Jorge Antonio; Villanueva Gutiérrez, Walker (2003). La Administración Tributaria y los Administrados. Editorial Pacífico. Lima- Perú.
- CALAMANDREI, Piero. (1984). Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires.
- CALVO Ortega, Rafael. (2004). Curso de Derecho Financiero I. Derecho Tributario: Parte General. Madrid: Editorial Thomson Civitas.
- CARNELUTTI, Francesco. (1973). Instituciones del Proceso Civil. Editorial Buenos Aires: Ejea. Buenos Aires – Argentina.
- CASSAGNE, Juan Carlos (2007). DERECHO ADMINISTRATIVO Tomo I y II. Séptima Edición. Buenos Aires – Argentina.
- CHIRA V. M., F. E. (2013). Claves, caminos y soluciones para elaborar proyectos y tesis. Trujillo: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
- DANÓS ORDOÑEZ & ZEGARRA VALDIVIA, Diego (1999). El Procedimiento de Ejecución Coactiva. Comentarios al Nuevo Régimen Legal: Ley 26979. Gaceta Jurídica Editores. Lima- Perú.
- DANOS ORDOÑEZ, Jorge (1999). El Procedimiento de Cobranza Coactiva como manifestación de la potestad de las Administración Publica de ejecución forzada de sus actos. Editores Revista Themis. Lima- Perú.
- DE JUANO, Manuel (1969). Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Editorial Molachino. Buenos Aires – Argentina. DIEZ; Manuel María (1961). El Acto Administrativo General. Editorial Argentina S.A. Buenos Aires – Perú.
- DE LA GARZA, Sergio Francisco. (1979). “Derecho Financiero Mexicano”. Editorial Porrúa S.A., México.

- DIEZ; Manuel María (1961). El Acto Administrativo General. Editorial Argentina S.A. Buenos Aires – Perú.
- ESTELA HUAMAN, José Alberto. (2005). El Procedimiento de Ejecución Coactiva. Editores Revista PUCP. Lima – Perú.
- FERNÁNDEZ VENTOSILLA, Alejandro (2008). Revisión del Procedimiento de Ejecución Coactiva. Editorial El Búho E.I.R.L. Lima – Perú.
- GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo (1983). Curso Derecho Administrativo. Editores Civitas S.A., Madrid – España.
- GIULLIANI FUNROUGE, Carlos. (1976). Derecho Financiero y Procedimiento Tributario. Editorial Depalma. Buenos Aires –Argentina.
- GONZALES GUERRERO (2010). Cobranza Coactiva ¿Y después de la Deuda Tributaria qué?. Juristas Editores. Lima – Perú.
- GUZMAN NAPURI, Christian (2007). El Procedimiento Administrativo. Ara Editores. Lima – Perú.
- HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2001). Procedimiento de Ejecución Coactiva y Reglamento de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva (D.S. N° 018-2008-JUS). Editores Moreno S.A., Lima –Perú.
- HUAMANI CUEVA, Rosendo (2007). Código Tributario Comentado.7° Edición. Jurista Editores. Lima –Perú.
- HUAMANÍ CUEVA, Rosendo (2013). Código Tributario Comentado. Editorial Jurista E.I.R.L. Lima- Perú.
- HUAYAPA GARRIAZO, Pablo J. (2010). Área Tributaria - ¿La revisión judicial ante el juez no competente suspende el Procedimiento de Ejecución Coactiva?. Editorial Revista Actualidad Empresarial. Lima –Perú.
- LUQUE BUSTAMANTE, Javier (1984). ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN EL PERÚ. Editores Revista PUCP. Lima – Perú.
- MENDOZA UGARTE, Armando (2006). Revisión del Procedimiento de Ejecución Coactiva. Editorial Carta Legal. Lima – Perú.

- MORÓN URBINA, Juan Carlos (2011). Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica. Lima – Perú.
- MONTESTRUQUE Rosas, Karina (2012). La no ejecutoriedad de los actos administrativos tributarios. Revista Análisis Tributario. Lima- Perú.
- MOREANO VALDIVIA, Carlos (2014). Algunos alcances sobre la facultad coactiva de la Administración Tributaria. Editorial Revista de Economía y Derecho UPC. Lima – Perú.
- NIMA, Elizabeth (2005) Las Medidas Cautelares en un Procedimiento de Cobranza Coactiva”, en Actualidad Tributaria- Actualidad Jurídica N.º 138. Lima- Perú.
- PEÑA CASTILLO, Jenny. (2011). Actualidad y Aplicación Práctica: El Procedimiento de Ejecución Coactiva II Parte. Editores Instituto Pacifico. Lima –Perú.
- PODETTI, Ramiro (1965). Tratado de las Medidas Cautelares, Editorial Ediar. Buenos Aires- Argentina
- REAÑO ROBLES, Johanna (2013). LA AUTOTUTELA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA. Editorial PROIURE- Investigación Jurídica. Lima- Perú.
- RIOS CARRILLO, Piero (2005). LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: UNA PROPUESTA DE EXPOSICIÓN Y JUSTIFICACIÓN HOLÍSTICA. Editorial PROIURE - Investigación Jurídica. Lima- Perú.
- SANZ LARRUGA, Francisco Javier (1988). LA VÍA ADMINISTRATIVA DE APREMIO: UNA POTESTAD ADMINISTRATIVA EN EXPANSIÓN. Editorial REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 117. Madrid- España.
- SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo (1996). Algunas Reflexiones sobre el Procedimiento de Cobranza Coactiva de Tributos. Editores Revista Themis. Lima-Perú.
- STASSINOPOULOS, Michel de (1954). Traité des actes administratifs, Atenas.
- TIRADO BARRERA, José Antonio (2011). La Ejecución Forzada de los Actos Administrativos. Palestra Editores. Lima – Perú.
- VALDIVIA SOTO, Miguel Ángel (2014). ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Editorial Universidad Peruana Unión. Lima – Perú.

- VELLOSO D., Francisco. (1995). ADMINISTRACION TRIBUTARIA – “Conclusiones Y Recomendaciones”. Editores Revista PUCP. Lima – Perú.
- VILLEGAS, Héctor B. (2005). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9° Edición. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina.
- VILLEGAS, Héctor Belisario (2001). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Editorial Astrea. Lima-Perú.
- ZEGARRA, Carmen (2011). La Administración Tributaria y los Administrados. Editorial Revista UMCH. Lima-Perú.

TESIS CONSULTADAS:

- ALARCÓN MELÉNDEZ, Jorge Miguel (1971). *El Procedimiento Administrativo De Cobranza Coactiva En El Perú*. Tesis para optar el Título profesional de Abogado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
- BENDEZU DÍAZ Carlos E. (1975). *El Procedimiento Coactivo*. Tesis para optar el Título profesional de Abogado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
- LÓPEZ CAVA, Max. (1998). *El Abuso del Derecho en el Procedimiento de La Cobranza Coactiva*. Tesis para optar el Título profesional de Abogado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- CARBAJAL GIL, Viviana Vanessa (2016). “*La Demanda de Revisión Judicial y su afectación a la Cobranza Coactiva del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, año 2012*”. Tesis para optar el Grado de Maestro en Derecho con mención en Derecho Tributario. Universidad Privada Antenor Orrego.

Anexos

ANEXO N° 01
MODELO DE FICHA TEXTUAL

Autor/a: Título: Año:	Editorial: Ciudad, País:
Resumen del contenido:	
Número de edición o impresión: Traductor:	

ANEXO N° 02
MODELO DE FICHA BIBLIOGRÁFICA

Autor(a) Título: Año: Editorial o imprenta: Ciudad, País: N° Edición: Traductor: N° de páginas:
--

ANEXO N° 03
ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCHACO

FECHA:.....

INVESTIGADOR:.....

ENTREVISTADO:.....

CARGO:.....

PREGUNTAS:

1) ¿CUANTO TIEMPO DE EXPERIENCIA TIENE EN EL CARGO QUE OCUPA?

2) ¿QUE OPINA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE REVISIÓN JUDICIAL EN EL EL PROCEDIMIENTO COACTIVO?

3) ¿QUE OPINA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ANTE LA REVISIÓN JUDICIAL?

4) ¿QUE OPINA RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD?

5) ¿QUE OPINA RESPECTO A MODERNIZAR LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA?

ANEXO N° 04
JURISPRUDENCIA